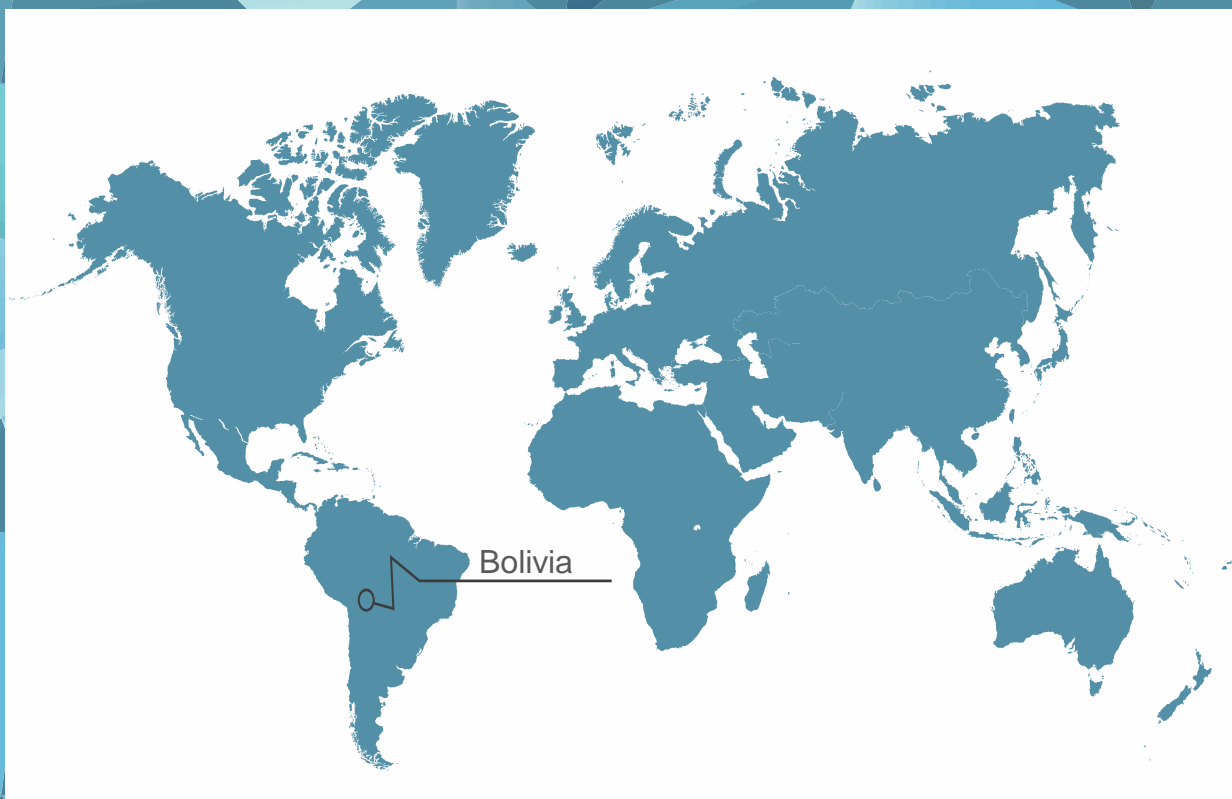


# GPPAC Alert



## BOLIVIA PLURINACIONAL:

Proceso de cambio y conflicto social (2006-2016)

Theo Roncken, Acción Andina



ACCION  
ANDINA



A Network of People  
Building Peace

Bolivia Plurinacional:  
Proceso de cambio y conflict social (2006-2016)

Autor: Theo Roncken  
© GPPAC. 2016

# Tabla de Contenidos

Introducción	p.5
Enfoque metodológico	p.6
Evolución global de la conflictividad boliviana	p.7
Causas y factores que mueven el conflicto boliviano	p.10
Escenarios, perspectivas y actores de cambio	p.15
Recomendaciones y observaciones finales	p.20
Bibliografía	p.21

## Lista de Abreviaciones y Acrónimos

CIDOB	Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CONAMAQ	Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
CPE	Constitución Política del Estado
COB	Central Obrera Boliviana
FEJUVE	Federación de Juntas Vecinales de El Alto
IBCE	Instituto Boliviano de Comercio Exterior
MAS	Movimiento Al Socialismo
MSM	Movimiento Sin Miedo
PLAC-Paz	Plataforma Latinoamericana para la Prevención de Conflictos y la Construcción de la Paz
RIN	Reservas Internacionales Netas
TIPNIS	Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure
UNITAS	Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social National

En febrero de 2016 el presidente Evo Morales sufrió su primera derrota electoral en una década de gestión gubernamental. En Referéndum Nacional, una mayoría de votantes rechazó la propuesta de permitir – contrario a lo establecido en la Constitución Política del Estado de 2009 – que Morales se postule como candidato en las elecciones de 2019 para un posible cuarto período presidencial 2020-2025.

Por más concluyentes que sean en términos constitucionales, los resultados del Referéndum no pusieron fin a la controversia. A lo largo de 2016 varias iniciativas del MAS y sus aliados políticos buscaron legitimar una posible reelección presidencial, y la poca convocatoria que evidencian otros posibles candidatos por el momento, hace factible un eventual éxito de esos esfuerzos. Recientes sucesos, sin embargo, también señalan el creciente riesgo de una nueva mayor pérdida de legitimidad del liderazgo político en Bolivia. Un ejemplo fue el asesinato del Viceministro Rodolfo Illanes en agosto de 2016, en medio de negociaciones con un sector beligerante de la minería cooperativizada. Este documento explora la historia reciente y el contexto socio-económico y político de esta situación, desde un enfoque en las interacciones entre Estado y sociedad, con el objetivo de identificar actores y opciones que permitan encauzar el proceso de cambio en el marco de la justicia social y la seguridad humana.

## INTRODUCCIÓN

En Bolivia, Estado y sociedad formalizaron en febrero de 2009 un nuevo marco fundacional, dejando atrás la adscripción republicana para dar paso al Estado Plurinacional, con una connotación de apertura política a los sectores sociales estructuralmente excluidos. La promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) cerró un prolongado y conflictivo período constituyente, y estableció las bases interpretativas y el horizonte para una reconstrucción colectiva de relaciones en los varios ámbitos y niveles de la vida social e institucional. En ese entendido, la previa aprobación del texto en referéndum popular marcó un hito esencial del ‘proceso de cambio’ que se había iniciado en años anteriores a la presidencia de Evo Morales, en el seno de una creciente protesta social contra un modelo de gestión política en declive. Uno de los componentes centrales del postulado cambio concierne las relaciones entre Estado y sociedad. Estas tendrían que enmarcarse en los principios fundacionales del nuevo Estado Plurinacional y, según el artículo 8 de la CPE, sustentarse en: “valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad,

reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales (...)”.

Estos antecedentes hacen que la actual conflictividad boliviana no puede ser leída en su contexto sin una valoración del proceso de cambio y los cambios que este ha conllevado. Este condicionante introduce un vector de ambigüedad en el análisis de la conflictividad, ya que existen lecturas contrastantes sobre la conducción política de ese proceso de cambio que, si bien son presentadas, no suelen ser debatidas en ámbitos públicos. Ello expresa una necesidad insatisfecha de prácticas instaladas que, en forma oportuna y permanente, faciliten el intercambio, la confrontación y la complementación de miradas entre actores y observadores alternos. Ciertamente se evidencia en el país, en particular a partir de la segunda presidencia de Evo Morales (2010-2014), un mayor impulso a iniciativas de observación y monitoreo para una mejor gestión de la conflictividad, y un palpable aumento del número de publicaciones dedicadas al tema y de ‘conflictólogos’ que intervienen en los diversos ámbitos públicos y privados. Sin embargo, escasean en el país los espacios de encuentro que puedan conducir a un afianzamiento de prácticas de reflexión colectiva amplias, diversas e integradas. Asumiendo que la coyuntura boliviana desde 2006 puede ser tipificada como un escenario de post-conflicto (ver abajo), con importantes dinámicas de fraccionamiento político-ideológico, económico y sociocultural, la insuficiencia del encuentro habitual entre sectores alternos es, en sí, motivo de alerta.

También en términos de la necesidad de identificar a las diversas dinámicas, motivaciones y prácticas instaladas que interactúan para incidir en las condiciones y el curso de la conflictividad boliviana – y que tienen potencial para provocar una crisis de gobernabilidad en el mediano plazo – se justifica un permanente y equilibrado monitoreo de señales de alerta. No obstante la gran cantidad de conflictos y una permanente tendencia a la radicalización de la protesta social, observadores coinciden en descartar la evolución de un escenario de ingobernabilidad en el futuro inmediato. Entre los principales factores de contención destaca la progresiva instalación de un colchón financiero durante las gestiones presidenciales de Evo Morales, gracias a los crecidos remanentes de la exportación de materias primas (sobre todo combustibles y minerales), que hasta hace poco incluso resiste a los efectos directos de la crisis económica mundial. Sin embargo, la conflictividad boliviana evidencia un amalgama de puntos neurálgicos como ser, en el área económica: la dependencia de industrias extractivas de exportación, flaquezas en la producción agrícola para el mercado nacional, tendencias a la privatización, y discursos que invisibilizan a las mismas; en el área socio-cultural: la creciente precariedad laboral, deficientes servicios públicos, menguantes prácticas colectivas de cuidado, violencias cotidiana, prácticas pedagógicas acriticas, y dinámicas de segregación y descomposición del tejido social; y en el área política: la persistencia y una renovación de prácticas autoritarias, clientelistas y excluyentes, deficiencias en la

consensuación de objetivos y programas estatales estratégicos, y recurrentes insuficiencias de gestión.

La intención de pensar y discutir las posibles configuraciones del conjunto de estos factores y sus incidencias combinadas en las dinámicas de conflictividad, no se limita a una valoración de riesgos (para la estabilidad política, la convivencia pacífica, etcétera). Más bien ha de prevalecer la noción de que “la lectura de los conflictos en clave democrática es central, porque permite evaluar la madurez del sistema político y su interacción con la sociedad”<sup>1</sup>. En el caso boliviano, esta interacción Estado-sociedad no sólo se destaca por ser sumamente dinámica sino también, comparada con otros países de la región, porque se reconfigura de sobremanera con base en las particularidades que hacen a la conflictividad social en un momento dado. En ese entendido y desde una perspectiva constructivista de transformación de conflictos mediante soluciones proactivas, también se busca informar sobre la presencia de oportunidades (de transformación) que se apoyan en “la concurrencia de ciudadanos informados, organizados y autónomos, con capacidad de agencia de cambio”<sup>2</sup>.

---

*En el caso boliviano, la interacción Estado-sociedad no sólo se destaca por ser sumamente dinámica sino también, porque se reconfigura dependiendo de la conflictividad social de cada momento.*

---

## ENFOQUE METODOLÓGICO

### Origen y alcances de este documento

Las características de la conflictividad social ‘en tiempos de Evo’ (2006-2015), sus factores de motivación, los actores y las oportunidades de transformación que éstos representan, hacen el tema central de análisis de este documento.

¿Cuáles son las áreas de esa conflictividad que sobresalen?, ¿Qué dinámicas menos evidentes también son relevantes?, ¿Qué motiva a los actores clave a operar en los diversos escenarios?, ¿Cómo cambiaron sus relaciones en el tiempo y cuáles son las expectativas para su protagonismo en los siguientes años?

Afortunadamente el país ya cuenta con importantes prácticas de observación y monitoreo de conflictos sociales, sistematizaciones y análisis de datos, y estudios de coyunturas, ejes temáticos y casos. Gracias a ello esta publicación puede apoyarse en un valioso cuerpo de libros, informes, artículos, notas de prensa y otras publicaciones

nacionales e internacionales. Vale decir que debido a limitaciones de espacio, no toda esa riqueza informativa se encuentra incluida o reflejada. La selección de datos se ha guiado en más de veinte años de trabajo en asociación directa con diversas agrupaciones y organizaciones sociales que forman parte de la conflictividad boliviana. Dichas experiencias concretas compensan de alguna manera la ausencia de un trabajo de campo específico en preparación al análisis. Como estrategia complementaria se incluyeron tres momentos de retroalimentación y validación, con la participación de observadores y estudiosos de la realidad boliviana<sup>3</sup>, e integrantes de la Plataforma Latinoamericana y Caribeña para la Prevención del Conflicto Armado y/o Violento y la Construcción de la Paz (PLAC-Paz).

### Conflicto social y conflictividad

A fines de diciembre de 2013, la unidad de análisis de un prestigioso periódico europeo nombró a Bolivia entre los países del mundo con mayor riesgo a sufrir disturbios por malestar social<sup>4</sup>. Al reproducir la noticia, medios bolivianos de comunicación inmediatamente descartaron cualquier posibilidad de inestabilidad política, como la que había enfrentado el país en el preámbulo de la época presidencial de Evo Morales.

Una mayoría de observadores coincide en su entendimiento de la espectacular dinámica de conflictividad social en Bolivia como un elemento esencial del desarrollo democrático<sup>5</sup>. Sin conflicto no hay cambio ni mejora. El conflicto es un “dato inevitable (...que) implica siempre una relación de poder, una inter-acción y una transacción”<sup>6</sup>, y el conflicto social puede tanto generar cambios positivos como constituirse en una fuerza política destructiva. El que se dé una u otra opción depende de “las distintas estrategias empleadas para procesar el conflicto”<sup>7</sup>. En ese entendido, se acepta la necesidad de considerar a la diversidad de actores involucrados. Para ello se hace útil la noción de ‘campo de conflicto’ definido como “el conjunto de acciones construidas por los movimientos sociales que expresan sus identidades,

---

<sup>3</sup> Se agradece en especial el apoyo del proyecto de investigación sobre violencia e inseguridad ciudadana en áreas urbanas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba.

<sup>4</sup> “Bolivia, con ‘Muy alto riesgo’ de rebelión para el 2014, según The Economist”, en *El Día* 23-12-2013, [http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id\\_articulo=134842](http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=134842).

<sup>5</sup> PNUD (2010) “Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia. Los cambios detrás del cambio. Desigualdades y movilidad social en Bolivia”, La Paz; Zegada, M.T., Arce, C., Canedo, G. y Quispe, A. (2011) “La democracia desde los márgenes: transformaciones en el campo político boliviano”, La Paz: Muela del Diablo/CLACSO; Fundación UNIR (2012) “Perfiles de la conflictividad social en Bolivia (2009-2011). Análisis multifactorial y perspectivas”, La Paz; y Rojas, C. (2015) “Conflictividad en Bolivia (2000-2014). ¿Cómo revertir la normalización de la presión social?”, La Paz: Friedrich Ebert Stiftung.

<sup>6</sup> Komadina, J. (2012) “Conflictos y desafíos políticos e institucionales del segundo gobierno de Evo Morales”, Cochabamba: PNUD/FBDM, p.2; citando a Coser (1961).

<sup>7</sup> Idem.

---

<sup>1</sup> Zegada, M.T. (2014) “Conflictos sociales, contenidos y sujetos en el proceso de cambio”, en:

<http://www.ceresbolivia.org/archivos/1251>.

<sup>2</sup> Idem.

intereses, producciones y orientaciones y que hacen mención a las relaciones sociales involucradas y a los intereses de poder en juego<sup>8</sup>. Así, en vez del conflicto social como hecho coyuntural, se propone estudiar a la conflictividad, entendida “no (...) como la mera suma de aquellos conflictos puntuales de índole similar, sino más bien como el conjunto de dichos conflictos más las relaciones que se establecen a partir de ellos<sup>9</sup>”.

La característica de la conflictividad en un momento dado varía según el tipo de conflicto que domina, la cultura política, la capacidad de movilización de actores involucrados y las respuestas del Estado, entre otros<sup>10</sup>. Para Bolivia una reciente encuesta señala una marcada paradoja en las dinámicas de conflicto: mientras ocho de cada diez personas prefieren el diálogo como medio para resolver los conflictos sociales, la mitad de éstas salen a la calle para hacerse escuchar. El responsable del estudio ha explicado el progresivo afianzamiento de prácticas de movilización y protesta social en las últimas décadas como una respuesta ante la pérdida de legitimidad del diálogo<sup>11</sup>, por lo que hoy la acción colectiva es “la manera privilegiada de interlocución entre Estado y sociedad<sup>12</sup>”.

## EVOLUCIÓN GLOBAL DE LA CONFLICTIVIDAD BOLIVIANA

### Antecedentes del proceso de cambio (2000-2005)

No hay duda de que la elección de Evo Morales, candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) en diciembre de 2005, marcó un punto de quiebre con el pasado. Hubo un desplazamiento de elites en el poder que se explica a partir de fracturas estructurales que cuestionaron al Estado desde distintas dimensiones: por reproducir las históricas dinámicas de exclusión social, por el manejo centralista, por la incompetencia del modelo económico neoliberal para responder a necesidades y expectativas de la población, y por la pérdida de credibilidad en el sistema de representación política y de los partidos que lo operaron.<sup>13</sup> Todo ello incentivaba un creciente malestar popular y su eventual canalización hacia la protesta generalizada.

Observadores ubican el inicio palpable de esta pugna por un cambio profundo en la Guerra del Agua, que en el año 2000 escenificó la construcción de una inédita alianza entre múltiples sectores sociales de campo y ciudad, unidos en su

---

*Hubo un desplazamiento de elites en el poder que se explica a partir de fracturas estructurales que cuestionaron al Estado desde distintas dimensiones.*

---

protesta contra la privatización de los servicios de agua de Cochabamba. Se inauguró un período de intensa movilización social que luego de cinco años culminaría con la victoria electoral de Morales. Las permanentes acciones populares con demandas de alta agregación en torno a la nacionalización de recursos naturales estratégicos, la anulación de políticas económicas neoliberales, y el establecimiento de cambios institucionales profundos mediante un proceso constituyente, catalizaron la pérdida de legitimidad de autoridades políticas y sus pactos de gobernabilidad, impulsando primero la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (octubre de 2003) y después la renuncia del presidente sucesor, Carlos D. Mesa (junio de 2005). Tras un fracasado intento de los partidos políticos ‘tradicionales’ por mantener control sobre el poder ejecutivo mediante la instalación del presidente del Senado como primer mandatario, finalmente asumió el cargo quien hasta entonces fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, con la expresa tarea de preparar nuevas elecciones nacionales. Con ello se cerró un período de conflictividad social histórico que, por su particular impacto en las condiciones de gestión gubernamental, marcó el inicio de un período de post-conflicto en 2006.

### 2006-2008: Cierre de la etapa de lucha inter-hegemónica

En la primera gestión presidencial de Morales (2006-2009) el número de conflictos sociales registrados se mantuvo en niveles relativamente bajos<sup>14</sup>. Se ha llamado este período el cierre de la etapa de lucha inter-hegemónica, en la que el enfrentamiento de dos bloques de poder antagónicos tuvo un efecto ordenador en la conflictividad y frenó su dispersión<sup>15</sup>. Sin embargo, a lo largo del período constituyente (ver Introducción), el clima de intensa polarización ideológica desató confrontaciones violentas entre sectores sociales alternos, generando una sensación de alta conflictividad. El

---

<sup>8</sup> Calderón, F. (1986) “Los movimientos sociales ante la crisis”, Buenos Aires: CLACSO/UNU, p.355.

<sup>9</sup> Sarti, C. y Aguilar, C. (2006) “La conflictividad guatemalteca y su abordaje constructivo”, Guatemala: Fundación Propaz/IBIS/Embajada de los Países Bajos, p.11.

<sup>10</sup> Según Komadina, op.cit., p.2.

<sup>11</sup> “Los intereses de grupo activan conflictos sociales desde 2006”, en *La Razón*, 15/12/2013, [http://www.la-razon.com/nacional/intereses-grupo-activan-conflictos-sociales\\_0\\_1961203964.html](http://www.la-razon.com/nacional/intereses-grupo-activan-conflictos-sociales_0_1961203964.html).

<sup>12</sup> Rojas, C., op.cit., p.21.

<sup>13</sup> Zegada, M.T., Arce, C., Canedo, G. y Quispe, A. (2011) “La democracia desde los márgenes: transformaciones en el campo político boliviano”, La Paz: Muela del Diablo/CLACSO, p. 29.

---

<sup>14</sup> Con un promedio de 24 conflictos por mes (Fundación UNIR, op.cit., pp. 50-51), mientras entre 2000-2005 se registró un promedio mensual de 42 conflictos (Rojas, C., op.cit., p. 27).

<sup>15</sup> Argirakis, H. (2013) “La reconfiguración del campo político boliviano”, en *Andamios*, <http://www.gobernabilidad.org.bo/revista-andamios/con-textos/item/la-reconfiguracion-del-campo-politico-boliviano>.

tema principal en disputa, la reforma del Estado, reveló “distintos tipos de clivajes: regional-territorial, étnico-cultural, político-ideológico, conflictos de clase e inclusive de carácter racial”<sup>16</sup>. Finalmente, el uso desproporcional de medidas de violencia por parte de algunos sectores opositores, junto a una inferior gestión de las claves de solución del conflicto por parte de sus aliados, terminó por crear divisiones en el bloque opositor y una insuperable pérdida de credibilidad de su proyecto político nacional.<sup>17</sup>

De otra parte, en el primer período presidencial también se manifestaron algunos de los escenarios de confrontación entre sectores sociales políticamente aliados pero económicamente enfrentados, que en años posteriores continuarán demandando mayor atención. Por regla se trata de campos de conflicto que en el marco de las prioridades de la política económica estatal no encuentran una (pronta) vía de solución estructural, por lo que vuelven a vigorizarse de forma recurrente para ser coyunturalmente ‘solucionados’ y entrar nuevamente en incubación. Un caso emblemático fue el violento enfrentamiento en octubre de 2006 de mineros cooperativistas y trabajadores sindicalizados de la minería estatal, en una disputa por la explotación de vetas de estaño del cerro Posokoni en Huanuni (departamento de Oruro). Gracias al entonces favorable valor de los minerales de exportación se pudo dar una salida al conflicto al contratar al total de cooperativistas involucrados en calidad de trabajadores estatales asalariados. Sin embargo, en abril de 2015, en una coyuntura de precios internacionales disminuidos, dirigentes sindicales alertaron sobre un plan de recorte de personal en la Empresa Minera de Huanuni y criticaron la ausencia de una política minera estructural.<sup>18</sup> Estadísticas recientes respaldan esta última observación y revelan una importante incoherencia entre el discurso oficial y la práctica política. Mientras el Gobierno boliviano sostiene haber nacionalizado al sector estratégico de la minería, en términos generales los datos indican un aumento del control privado sobre la actividad minera en Bolivia. Como explicado más abajo, también las violencias entre cooperativistas mineros y fuerzas de la Policía Boliviana que se dieron en agosto de 2016 en la zona de Panduro, reflejaron esa incoherencia entre la palabra y el hecho.

### **2009-2010: Primeros quiebres en la construcción hegemónica**

La contundente victoria del oficialismo en las elecciones nacionales de diciembre de 2009 (el presidente Morales obtuvo 63,9% de los votos), dio paso a nuevas prácticas en la política formal. Con composiciones altamente favorables

en ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional Legislativa (APL), el MAS estaba en posición de imponer normativas y políticas de Estado sin necesidad de consensuar sus planes con otras fuerzas parlamentarias. Y es lo que en efecto comenzó a hacer, a tiempo de seguir apoyándose, como ‘instrumento político de los pueblos’<sup>19</sup>, en consultas dirigidas con movimientos sociales aliados. Así se inició un período caracterizado por los quiebres en la construcción hegemónica<sup>20</sup> que llegaron a manifestarse con aliados en ambas esferas de ese *modus vivendi* político. En el ámbito de la institucionalidad el partido de mayor respaldo político en la ciudad de La Paz, el Movimiento Sin Miedo (MSM), comenzó a criticar para luego denunciar y desmarcarse de la forma de hacer política del MAS, a la que calificó de impositiva y excluyente. Al mismo tiempo se hicieron más evidentes las “tensiones al interior del partido, con quienes cuestionan o no acatan las decisiones oficialistas”<sup>21</sup>.

En este escenario las elecciones municipales y departamentales de abril de 2010 se constituyeron en una primera oportunidad para concretar una aún tímida reconfiguración de fuerzas políticas alternas. El MAS, si bien ganó seis de las nueve gobernaciones departamentales y 228 de las 336 alcaldías, se vio superado en siete de las diez ciudades más grandes del país y en varios municipios que antes calificaban como “bastiones de su poder”<sup>22</sup>. Se ha observado que estos resultados abrieron nuevos campos de conflicto por provocar en el MAS el ansia de recuperar los espacios de poder que consideraba perdidos<sup>23</sup>.

### **2011-2012: Dos campos de conflicto que marcaron un límite**

Datos estadísticos dan cuenta de una importante reactivación en el segundo período presidencial de movilizaciones y acciones de protesta con demandas económicas y reivindicativas. Para el año 2010 se ha calculado una multiplicación por tres del promedio mensual de conflictos<sup>24</sup>.

---

*El gasolinazo obligó a la población a tomar conciencia sobre sus dependencias y vulnerabilidades colectivas.*

---

Se registra una “conflictividad con afán *redistributivo* y espoleada por una Constitución generosa en la otorgación y exigibilidad de derechos en un contexto de hibridez sistémica (crecimiento económico, legitimidad gubernamental y déficits institucionales)”<sup>25</sup>; con conflictos que “generan inestabilidad pero no ingobernabilidad, pues su objetivo es forzar un

<sup>16</sup> Zegada et al. (2011), op.cit., p.306.

<sup>17</sup> Zegada et al. destacan como factor determinante en el declive del bloque opositor “el despojo discursivo y simbólico **que sufrieron** cuando el MAS les arrebató la bandera de las autonomías y la incorporó en el nuevo texto constitucional modificando su alcance y orientación” (Idem, p.307).

<sup>18</sup> “Trabajadores aseguran que el Gobierno fracasó en Huanuni y Enatex”, en *Erbol* 30-04-2015, <http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/economia/153772/trabajadores-aseguran-que-el-gobierno-fracaso-en-huanuni-y-enatex.html>.

<sup>19</sup> El nombre original del MAS añade las siglas IPSP: Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.

<sup>20</sup> Zegada et al., op.cit., p.88.

<sup>21</sup> Idem, p.308.

<sup>22</sup> Fundación UNIR, op.cit., p.56.

<sup>23</sup> Zegada et al., op.cit., p.92.

<sup>24</sup> Fundación UNIR, op.cit., p.50.

<sup>25</sup> Rojas, C., op.cit., p.60.



resultado (...) no desafiar a la autoridad”<sup>26</sup>. Sin embargo, en días finales de 2010 un intento del gobierno boliviano para decretar la eliminación del subsidio estatal sobre los combustibles de uso interno (medida que sería conocida como el gasolinazo), inmediatamente provocó un alza generalizada de precios y fue respondido con una vigorosa ola de movilizaciones populares. Sorprendido por el alto poder de agregación de demandas que mostraban las acciones de protesta, y reconociendo que se enfrentaba a un primer cuestionamiento serio a su gestión de gobierno, el presidente Morales decidió dar un paso atrás y anuló el decreto días después. Si bien con ello logró desactivar a la protesta, el gasolinazo obligó a la población a tomar conciencia sobre sus dependencias y vulnerabilidades colectivas, y es posible que dejara instalada una mayor desconfianza hacia la gestión gubernamental.

Los sucesos de diciembre de 2010 también parecen haber avivado anteriores tensiones entre aliados y terminaron por consolidar un importante clivaje interno en el campo político del MAS<sup>27</sup>, alejando a organizaciones matrices de los pueblos indígenas del oriente (CIDOB) y del occidente (CONAMAQ)<sup>28</sup>. En 2011 y 2012 ambas organizaciones protagonizaron movilizaciones de gran impacto en defensa de la Madre Tierra y los derechos colectivos indígenas, puestos en entredicho por las prioridades de la política económica estatal. En el eje de este campo de conflictividad se encontraban las marchas indígenas en protesta contra la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Pero, más allá de este escenario particular la defensa del TIPNIS articuló un desafiante conjunto de críticas estructurales a la gestión del MAS en torno a dos temas centrales: los impactos socio-ambientales de actividades extractivas políticamente priorizadas y privilegiadas; y el incumplimiento gubernamental del derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, constitucionalmente reconocido como condicionante ineludible para actividades extractivas en territorio indígena. No obstante la notoriedad nacional e internacional que adquirieron ambas marchas indígenas y la gran simpatía que lograron despertar en la población boliviana, sus logros inmediatos se disiparon con el tiempo sin llegar a acumular una demanda de cambio estructural con capacidad para plantear un serio reto a la legitimidad política del gobierno boliviano.

### **2013-2015: La hegemonía limitada en acción**

En la segunda gestión presidencial de Morales y hasta hoy, los dos campos de conflicto resumidos en el párrafo anterior son los que más se acercaron a un cuestionamiento estructural generalizado. Sin embargo, en cuanto a potencia

para constituirse en su momento en un reto a la hegemonía política del MAS, ninguno llegó a términos mayores. Al disiparse sus impactos inmediatos, la conflictividad volvía a ser dominada por reclamos y disputas sectoriales, motivados por causas reivindicativas y redistributivas dispersas.

---

### *Los cuestionamientos a la gestión gubernamental han vuelto a manifestarse mediante un gran número de movilizaciones puntuales y aisladas.*

---

En retrospectiva a esta evolución, se ha destacado la capacidad del gobierno boliviano de “reposicionarse estratégicamente y redefinir el escenario sociopolítico, volcándolo a su favor”<sup>29</sup> y de aprender de la conflictividad con el fin de “orientar la brújula del poder”<sup>30</sup>. Los resultados de las elecciones nacionales de octubre de 2014, que nuevamente mostraron un apoyo a la candidatura de Morales mayor a 60%, respaldan estas lecturas. Sin embargo en un plano menor, ambos campos de conflicto emblemáticos conllevaron una aceleración del proceso de reconfiguración de fuerzas políticas. Sobre las dinámicas propias de ese proceso se ha comentado que la hegemonía del MAS no se limita en sus alcances por la fuerza sino por un déficit de liderazgo, lo que caracterizaría la resultante relación de poderes políticos como: “(...) una suerte de ‘hegemonía limitada’ (...que) se verifica en la predominancia de un discurso marcadamente antagonista y virulento que permanentemente expulsa simbólicamente a los adversarios del campo político, estigmatizándolos como fuerzas de derecha. En contraste, las fuerzas de oposición al MAS no sólo carecen de un discurso y una visión alternativa, tampoco cuentan con un liderazgo y una estrategia capaces de unificar a sus aliados y disputar el centro político”<sup>31</sup>.

En esta perspectiva no es casual que en la repuesta gubernamental al conflicto predominan “mecanismos no-formales como las alianzas secretas con grupos de poder, las cuotas en la administración pública para las organizaciones sociales y los llamados ‘incentivos selectivos’ que permiten intercambiar la fidelidad política a cambio de la distribución de diversos recursos”<sup>32</sup>. Todos estos instrumentos se dirigen a una disuasión o contención de la conflictividad en el corto y quizás mediano plazo, pero a lo largo restan credibilidad y legitimidad a la gestión gubernamental, al partido de gobierno y probablemente, al modelo de representación política como tal. Por otra parte, la constitución reconoce mecanismos de participación ciudadana y control social, pero su implementación inicial revela una imposición de sesgos y limitaciones que coartan su potencial desarrollo como los ‘contrapoderes’ que necesita

<sup>26</sup> Idem, p.65.

<sup>27</sup> Argirakis, art.cit.

<sup>28</sup> Komadina, J. y Regalsky P. (2014, sin editar) señalan en “El movimiento afroboliviano” que este clivaje ideológico ya existía en el período pre-constituyente (2004-2006), debido a diferencias entre sectores (cocalleros y colonizadores) que defendían al MAS como su principal instrumento de representación política y sectores que demandaban una representación directa de cada pueblo indígena originario.

<sup>29</sup> Rojas, C., op.cit., p.65.

<sup>30</sup> Argirakis, art.cit.

<sup>31</sup> Komadina, op.cit., p.9

<sup>32</sup> Idem, pp.9-10.

un proceso democrático para enriquecerse y profundizarse<sup>33</sup>.

En consecuencia, los cuestionamientos a la gestión gubernamental han vuelto a manifestarse mediante un gran número de movilizaciones puntuales y aisladas, casi todas motivadas por reclamos o disputas locales. Tampoco las elecciones municipales y subregionales de marzo de 2015 que, en términos globales, mostraron resultados similares a las del año 2010, auguran la proximidad de un cambio mayor en la configuración de poderes<sup>34</sup>, ni en la respuesta que predomina ante la propuesta política alterna. A modo de ilustración vale resaltar el contraste en las lecturas de resultados que dieron a conocer por un lado el presidente (“Hemos ganado, yo lo digo de frente, hemos ganado”) y el vicepresidente de Bolivia (“El Movimiento Al Socialismo se ha consolidado como la única fuerza política a nivel nacional”), y por el otro lado el alcalde electo de Cochabamba (“Hoy tenemos una oposición renovada con nuevos liderazgos, eso la da un nuevo aire”) y el sacerdote y antropólogo Xavier Albó (“Ganar, pero por menos de dos tercios, puede ser una bendición para que el MAS mejore sus prácticas democráticas con mayor pluralismo y menos autoritarismo”).<sup>35</sup>

## CAUSAS Y FACTORES QUE MUEVEN EL CONFLICTO BOLIVIANO

La agenda popular que recogió el MAS en su conquista del poder político se centró en dos rasgos estructurales del modelo estatal en declive, y causas de la creciente conflictividad: la conducción económica inequitativa y dependiente, y la institucionalidad autoritaria y excluyente. Estas características fueron una constante a lo largo de la historia colonial y republicana del país, moldeándose según los intereses de los sucesivos grupos de élite que compartían el poder de decisión o llegaban a dominarlo. ¿En qué medida ello ha cambiado con el proceso de cambio y la presidencia de Morales, y cuáles son las perspectivas para los próximos años?

### **Factores económicos: huevos de oro y sueños de soberanía**

En particular las cifras macroeconómicas del período 2006-2014 son llamativas. La balanza de pagos del país ya registra saldos positivos desde 2004, año en el que se dio un primer aumento sustancial en los precios de exportación de petróleo y gas. Hoy, estos recursos naturales no renovables y los minerales, destacan como los ‘huevos de

oro’ de la economía boliviana y son la principal causa directa del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de USD 1.051 en 2005 a USD 2.919 en 2013<sup>36</sup>, año en el que las Reservas Internacionales Netas (RIN) llegaron a sumar USD 14.430 millones<sup>37</sup>. El Gobierno boliviano destaca el éxito del postulado modelo de economía mixta con impactos

---

*Observadores críticos afirman la bonanza y el importante potencial de la exportación de materias primas, pero advierten sobre el progresivo alejamiento del país de una economía soberana.*

---

directos en salarios e índices de inequidad y pobreza<sup>38</sup>, como también las crecientes inversiones estratégicas destinadas a mejorar la producción nacional, la soberanía alimentaria, servicios públicos, e infraestructuras de transporte y comunicación, entre otros.

Observadores críticos afirman la bonanza y el importante potencial de la exportación de materias primas, pero advierten sobre el progresivo alejamiento del país de una economía soberana. Por una parte se cuestiona la excesiva priorización de sectores ‘duros’ cuyos ingresos dependen de demandas y precios internacionales, y que generan divisas pero poco empleo en desmedro de un serio proyecto de diversificación económica que a lo largo permitiría sustentar relaciones más autónomas y condiciones más equitativas. En ese entendido hay quienes desmienten el discurso de la nacionalización de hidrocarburos y minerales. Respecto al sector energético se ha calculado que en 2010 las empresas transnacionales controlaban 82,2% de la producción nacional, más que en 2005 (75,5%)<sup>39</sup>. En el caso de los minerales, en 2012 la empresa privada concentraba 72,5% de la superficie nacional en concesión y 67,1% del valor de la producción.<sup>40</sup> Además, la minería muestra en los últimos años una vertiginosa expansión de la participación

---

<sup>36</sup> Banco Central de Bolivia BCB (2014) “Principales logros económicos y sociales 2006-2013”, La Paz, p.20.

<sup>37</sup> Fundación Milenio (2014) “Informe de Milenio sobre la economía. Gestión 2013”, La Paz, p.92.

<sup>38</sup> Según el Banco Central de Bolivia la extrema pobreza bajó de 38,2% en 2005 a 21,6% en 2012 en todo el país, y de 62,9% a 40,9% en el área rural, mientras el factor de diferencia entre el ingreso del 10% más pobre y el 10% más rico de la población bajó de 128 en 2005 a 46 en 2012 (BCB, op.cit., pp.36-37).

<sup>39</sup> Con participación mayoritaria de la empresa brasilera Petrobras en términos generales (63,7%) y de la Repsol española (más de 50%) en el caso de la gasolina; Arze, C. (2013) “‘Nacionalización’ de los hidrocarburos del gobierno del MAS: balance y perspectivas”, en *Hora 25*, no. 104 (octubre), <http://cedla.org/content/42042>, pp.9-11.

<sup>40</sup> Sandi, E. (2014) “Minería, desarrollo y conflictividad social”, en Quiroga, M.S. y Avejera, J. (2014) *La veta del conflicto. Ocho miradas sobre conflictividad minera en Bolivia (2010-2014)*, La Paz: Fundación UNIR, p.38.

<sup>33</sup> Según Rosanvallon, P. (2007) en “La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza”, Buenos Aires: Manantial.

<sup>34</sup> Aunque la reciente reprobación en referéndum de varias propuestas de ‘Estatuto autonómico’ departamentales en septiembre de 2015, indica un importante nivel de resistencia pasiva en la población.

<sup>35</sup> Peralta, P. “¿Quién ganó, quién perdió en las elecciones subnacionales?”, en *Página Siete* 26-04-2015, <http://www.paginasiete.bo/ideas/2015/4/26/quien-gano-quien-perdio-elecciones-subnacionales-54502.html>.

cooperativizada que por regla evidencia pésimas condiciones laborales y poco interés en aminorar impactos ambientales. No obstante el origen popular compartido y su gran heterogeneidad en cuanto a recursos de trabajo y volúmenes de producción, también este sector es de tipo privado y su puje aminora una ya debilitada explotación estatal<sup>41</sup>.

Un segundo tema de preocupación concierne la evolución del sector agropecuario. Ya en 2000, Bolivia entró en un patrón de déficit alimentario “con 20% de la demanda interna cubierta por importaciones debido a la inestabilidad de la superficie cultivada en los llanos, a los cambios en la dieta alimenticia de los hogares por la urbanización y al retroceso de la agricultura campesina que abastecía el mercado interno”<sup>42</sup>. Desde entonces la dependencia de la importación de alimentos ha ido en aumento<sup>43</sup>, una tendencia que no logra revertir la mayor inversión pública en el agro que se evidencia durante la presidencia de Morales. Ciertamente se ha registrado de 2011 a 2013 un prometedor crecimiento del área de cultivación para productos agrícolas de consumo nacional como hortalizas, trigo, frijol y papa<sup>44</sup>. Sin embargo, en términos globales la orientación política apuesta a aumentar la producción de alimentos mediante una ampliación de la frontera agrícola. Como en toda la región, esto “va de la mano de la transnacionalización de las empresas y (...) del capital extranjero que ha tomado la delantera”<sup>45</sup>. Un análisis de esta situación para el agronegocio de la soya señala que este, “afincado principalmente en Brasil y Argentina (...) mira a Bolivia como un territorio natural para la expansión”, y que la actual presencia de cerca de 14.000 pequeños productores familiares en la soya boliviana es vista como una situación anormal que ha de desaparecer.<sup>46</sup> Así, igual a lo que pasa en la producción de gas y petróleo, el creciente respaldo gubernamental a la agroindustria empresarial asentada en las tierras bajas del oriente, resulta notablemente favorable a los datos globales de la producción agraria y el ingreso de divisas, pero no genera más empleo ni modifica el rol e impacto central que sigue teniendo la declinante producción campesina en zonas vallunas y altiplánicas en la provisión de alimentos para el consumo interno<sup>47</sup>.

El alza de precios y la periódica escasez de alimentos,

productos de la creciente dependencia de alimentos importados (cuyos precios tienden a subir), son la mayor causa de una importante presión inflacionaria (en 2013, con 6,48%, Bolivia registró una tasa de inflación comparadamente alta en la región). Si bien medidas gubernamentales como los diversos bonos sociales, incrementos salariales y subsidios sobre productos básicos

---

*La dependencia de la importación de alimentos ha ido en aumento, una tendencia que no logra revertir la mayor inversión pública.*

---

importados, ayudan a proteger el poder adquisitivo de la familia boliviana; el mayor factor para ello parece estar en las remesas de la migración al exterior<sup>48</sup>. También negocios subterráneos como el circuito de la cocaína, la importación de autos ‘chutos’ (no registrados y sin pago de impuestos), y el contrabando de oro, aportan a un aumento de recursos líquidos en el país, pero su impacto en la economía familiar es ambiguo. Por un lado proveen un colchón de resguardo para tiempos de crisis económica, pero lo hacen en forma discrecional y el efecto redistributivo es limitado. La población puede, por ejemplo, acceder a un auto ‘chuto’ en un precio razonable pero, debido a la permanente inversión de ganancias ilícitas (‘lavado’), paga desmesurados alquileres para su casa. Esta ambigüedad también se refleja en la relación de estos negocios subterráneos con la conflictividad social. Por ejemplo, la explotación de oro en cooperativas para su posterior exportación como supuestos ‘amalgamas’ o ‘desperdicios’ libres de impuestos por parte de rescatistas asociados, por un lado se presenta como “una respuesta espontánea al problema del desempleo”<sup>49</sup>, al mismo tiempo sustrae recursos impositivos al Estado e incentiva numerosos conflictos por disputas sobre áreas de explotación.

Finalmente, cabe señalar que la reciente baja de valores del gas y petróleo en el mercado mundial, desde 2015 muestra un mayor impacto en el estado global de la economía boliviana. Según cálculos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el ingreso anual de las exportaciones bajó de USD 12,893 millones en 2014 a USD 8,726 millones en 2015, resultando en el primer balance comercial negativo en una década.<sup>50</sup>

---

<sup>41</sup> En 2012 la minería estatal controlaba 16,5% del área concesionada y apenas 5,5% de la producción nacional (ídem).

<sup>42</sup> Fundación UNIR, op.cit., p.79.

<sup>43</sup> En 2013 el Instituto Boliviano de Comercio Exterior reportó autosuficiencia en no más de 28 de 112 productos del rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas (en Erbol 17-10-2013, [http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/17102013/bolivia\\_es\\_sobrerana\\_en\\_28\\_productos\\_de\\_canasta\\_familiar](http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/17102013/bolivia_es_sobrerana_en_28_productos_de_canasta_familiar)).

<sup>44</sup> Fundación Milenio, op.cit., p.174.

<sup>45</sup> Urioste, M. (2013) “La expansión del agronegocio en Bolivia”, en *Nueva Crónica*, no. 133, 29-10-2013, <http://www.nuevacronica.com/economia/la-expansion-del-agronegocio-en-bolivia/>.

<sup>46</sup> Idem.

<sup>47</sup> Cfr. Fundación UNIR, op.cit., p.79.

---

<sup>48</sup> Idem, p.78.

<sup>49</sup> Carlos Arze en Carvajal, R. “Oro: Ni EBO ni la Aduana pueden con el contrabando”, *Erbol* 19-12-2013, [http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/19122013/oro\\_ni\\_ebo\\_ni\\_la\\_aduana\\_pueden\\_con\\_el\\_contrabando](http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/19122013/oro_ni_ebo_ni_la_aduana_pueden_con_el_contrabando).

<sup>50</sup> López, E. “Tras una década de repunte, las exportaciones se desploman”, en *Los Tiempos* 03-08-2016, <http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160803/decada-repunte-exportaciones-se-desploman>.

### **Factores socio-culturales: inequidades históricas y violencias cotidianas**

También en el campo de la política social la valoración de aciertos y desaciertos da lugar a la polarización. Para comenzar, áreas como la educación, la salud y el transporte, albergan proyectos 'estrella' de la crecida inversión pública pero también muestran una vibrante conflictividad social<sup>51</sup>. Esta, sin embargo, se teja comúnmente en torno a problemas locales y puntuales de gestión. El sector educativo se caracteriza por un histórico y beligerante liderazgo del magisterio urbano, y sus reclamos se asocian en la actualidad mayormente con un acelerado y poco consensuado proceso de 'revolución educativa' que en el primer semestre de 2014 provocó movilizaciones a lo largo del país. Por su lado, los campos de conflicto del área de la salud, que por regla son dispersos y no llegan a cuestionar a fondo las acumuladas consecuencias de una permanente subinversión, generaron en la primera mitad de 2015 una inaudita polémica sobre el nivel de prioridad del sector en el presupuesto público<sup>52</sup>. Los servicios de salud en Bolivia están estructuralmente marcados por inequidades y deficiencias (en cuanto a oferta, accesibilidad, calidad de servicio, gestión y gerencia, condiciones de trabajo, infraestructura, etcétera), pero las protestas que se manifiestan comúnmente se dirigen a cuestionar problemas locales de gestión como son los permanentes sobrecargos laborales y retrasos en el pago de salarios. Finalmente, el gremio del transporte corporativizado constituye una importante base política del MAS y da muestras de tener gran incidencia en la definición de políticas públicas, al combinar una participación directa en el parlamento y otros espacios formales de poder con acciones de presión basadas en su capacidad de controlar rutas y accesos terrestres en todo el país. Los escenarios de conflicto típicamente enfrentan intereses de este sector con los de la población en general y legitiman un rol de negociación y resolución para autoridades locales o nacionales.

De otra parte, la situación general del empleo aporta un elemento de conflictividad con potencial de acumulación. La Bolivia Plurinacional registra tasas globales de desempleo históricamente bajas pero varios grupos poblacionales viven una realidad muy distinta. Se ha observado que, debido a la

poca capacidad ahorrativa del trabajador boliviano y la ausencia de mecanismos de protección social, "la desocupación abierta bajo los parámetros técnicos convencionales es reemplazada por la difusión del fenómeno de la subocupación o subempleo"<sup>53</sup>; y que las mujeres y los jóvenes se encuentran sobre-representados en estos "trabajos más inestables, menos productivos y desprotegidos" de la llamada economía informal<sup>54</sup>. Desde 2005 se tendría que añadir a quienes recibieron más formación educativa, ya que son esfuerzos que dejaron de ser recompensados por el mercado de trabajo, "tanto en el

---

*Áreas como la educación, la salud y el transporte, albergan proyectos 'estrella' de la crecida inversión pública pero también muestran una vibrante conflictividad social.*

---

empleo asalariado como en el empleo independiente"<sup>55</sup>. Un estudio comparado realizado en nueve países de la región registró en el período 2009-2013 un aumento neto de empleos promedio de 7,9%, concentrado en empleos formales que crecieron con 12,7%<sup>56</sup>. En Bolivia, sin embargo, la formalización de empleos ni avanzó ni retrocedió (manteniendo un nivel de 30%), mientras la brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres creció debido a que "el empleo masculino se formalizó en tanto que disminuía el grado de la formalidad para el femenino"<sup>57</sup>. Respecto al empleo juvenil, un balance independiente de las políticas ejecutadas en el período 2007-2014 concluye que, si bien "los jóvenes tuvieron significativa atención en las políticas de empleo en Bolivia, los programas y proyectos implementados fueron costosos, de baja cobertura y reducido impacto para comenzar a resolver la problemática"<sup>58</sup>.

En este contexto adverso gana relevancia una advertencia sobre la habitual desatención de políticas públicas al campo del tejido social: "si un conflicto desgarró el tejido social, muchos y constantes conflictos lo acaban destruyendo, dejando en su lugar un gran déficit social y la pérdida de los vínculos sociales tan necesarios para el funcionamiento

---

<sup>51</sup> La población boliviana registra una disposición a la protesta bastante mayor para la consecución de mejores servicios de salud y educación que para reclamar mejores salarios y condiciones de trabajo ("Informe 2013", Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, pp.42-43). De otra parte los sectores laborales de las áreas de transporte, salud y educación protagonizaron en años recientes juntos más de una cuarta parte de los conflictos sociales (Arze, A., 2014, "La lógica del conflicto minero", en Quiroga y Avejera, op.cit., p.54).

<sup>52</sup> El motivo directo de la polémica fue una campaña pública iniciada por el padre Mateo Bautista, que planteaba invertir 10% del presupuesto público en el sector salud y generó acaloradas disputas con voceros gubernamentales. En septiembre de 2015 la Iglesia católica anunció un repentino cambio de destino del padre Bautista, quien cumplió 13 años de servicio en Bolivia.

---

<sup>53</sup> Arze, Carlos (2014) "Agudización de la conflictividad laboral en la minería", en Quiroga y Avejera, op.cit., p.133.

<sup>54</sup> Farah, I., Sánchez, C. y Wanderley, F. (2009) "Políticas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes en el Estado Plurinacional de Bolivia", Santiago de Chile: CEPAL-ONU/ASDI, p.13.

<sup>55</sup> Wanderley, F. "Más calificación, menor remuneración: la nueva realidad laboral en Bolivia", 06-11-2014, en: <http://fernandawanderley.blogspot.com/search/label/Pobreza>.

<sup>56</sup> "Formalización del empleo y distribución de los ingresos laborales", Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, No. 11 (Octubre de 2014), Santiago de Chile: CEPAL/OIT, p.16.

<sup>57</sup> Idem, p.21.

<sup>58</sup> Rojas, B. "Sembrar para cosechar poco: balance de las políticas de empleo juvenil en Bolivia", 07-07-2015, en: <http://www.cedla.org/content/47744>.

social<sup>59</sup>. Partiendo de una interrelación entre desigualdad, violencia y capital social<sup>60</sup>, el tejido social, entendido en su capacidad de activar contactos fructíferos y vigorosos entre propios y extraños, tiene además un potencial rol de importancia en la prevención, gestión y reparación del conflicto social. En ese entendido cabe destacar dos factores sociales interconectados – prácticas cotidianas de violencia, y una creciente preocupación por motivos de inseguridad ciudadana – que impactan en la conflictividad boliviana, primero por tensionar las relaciones de convivencia en la familia y la sociedad, y segundo porque en el período presidencial de Morales, adquirieron peso en la agenda política y comenzaron a influir en las relaciones de Estado y sociedad. La mayor presencia de la seguridad ciudadana en la agenda pública boliviana se apoya en fundamentos tanto objetivos (elevada denuncia y victimización de determinados delitos) como subjetivos (creciente percepción de inseguridad), y refleja motivaciones tanto sociales (ubicación del tema entre las principales preocupaciones de la población) como políticas (reforzamiento del poder estatal y las prácticas de control institucional). En particular desde 2011 el gobierno del MAS impulsa un protagonismo estatal que al mismo tiempo potencia la preocupación pública por el tema y el posicionamiento de la institucionalidad estatal en el eje de solución. De esta manera, desde un enfoque en el endurecimiento de leyes penales y una anunciada 'lucha frontal contra el delito y la criminalidad'<sup>61</sup>, se refuerza materialmente a un aparato policial que, en ausencia de una eficaz veeduría estatal y/o ciudadana, no se aparta de sus característicos altos niveles de nepotismo, corrupción y autonomía de gestión. El nuevo impulso represivo también profundiza la preocupante crisis estructural de la justicia penal, que se expresa con más claridad en el ámbito carcelario: con 84% Bolivia es el país de la región con mayor detención preventiva<sup>62</sup>, mientras en las ciudades la sobrecarga de cárceles llega a 300%<sup>63</sup>.

La permanente preocupación ciudadana por problemas de inseguridad también se manifiesta en acciones de 'linchamiento', presentada en la voz popular como una forma colectiva de 'ejercer justicia' a mano propia. En

relación a estas violencias, se ha observado una importante aunque ambigua actitud permisiva en la población boliviana<sup>64</sup>. Una encuesta urbana de 2011 registró un posicionamiento similar frente a las violencias cotidianas: mientras 84% de respondientes expresó su desacuerdo con éstas en general, 47% aceptó algún justificativo de su uso, por ejemplo "para hacerse respetar"<sup>65</sup>; reflejando la persistencia de imaginarios y pensamientos que normalizan las recurrentes prácticas de violencia en la sociedad boliviana. Estas victimizan en particular a las y los integrantes más vulnerables y se concentran en el ámbito doméstico donde se mantienen mayormente invisibilizadas. La reciente mayor atención pública para algunas violencias de género (en particular el feminicidio) y los campos de conflicto que éstas despiertan, (aún) no se traducen en una palpable tendencia a cuestionar ideas, hábitos, relaciones y estructuras que favorecen el ejercicio de poder subyacente. En los últimos años las voces desde la sociedad organizada se suman, más bien, a la promoción de políticas de seguridad y protección ciudadanas propias de un Estado penal. Estas reclaman más recursos de poder para la institucionalidad estatal, con los que pretenden dar solución a problemáticas sociales complejas en el estrecho marco de la justicia criminal.

---

*En los últimos años las voces desde la sociedad organizada se suman, más bien, a la promoción de políticas de seguridad y protección ciudadanas propias de un Estado penal.*

---

### **Factores políticos: horizontes encontrados y prácticas prebendales**

Se ha descrito a Bolivia como "un país con una cultura política compleja en la que coexisten la democracia, el autoritarismo, el enfrentamiento y el pacto, la acción directa y la norma legal, el conflicto y el consenso, el planteamiento de demandas al Estado sin confiar en éste, la judicialización de los conflictos sin creer en la justicia, la recurrencia a la protesta social y al conflicto aunque éstos no siempre sean efectivos"<sup>66</sup>. ¿Cómo explicar una construcción social tan contradictoria? Una lectura psicosocial sostiene que la explotación colonial de la plata de Potosí dejó en el subconsciente colectivo boliviano un desmesurado miedo de ser despojado por 'el otro', en particular por el 'extranjero'<sup>67</sup>, y la apremiante necesidad de "borrar simbólicamente el enorme trauma de la colonización (...llevando a) hacer la

---

<sup>59</sup> Rojas, C., op.cit., p.88.

<sup>60</sup> Entre otros planteada por Sampson, Coleman y Wacquant.

<sup>61</sup> La práctica operativa refleja una priorización de objetivos en el marco de la seguridad del Estado y el orden público, a la que se añaden sesgos e intereses propios de la institución policial.

<sup>62</sup> Rojas, G. "Informe de la ONU. Bolivia encabeza lista entre los países de Latinoamérica con más retardación de justicia", en *Eju!* 27-08-2013, <http://eju.tv/2013/08/informe-de-onu-bolivia-encabeza-lista-entre-los-paises-de-latinoamrica-con-ms-retardacin-de-justicia/>. A consecuencia de sucesivos decretos de indulto selectivo, el porcentaje de la población sin proceso concluido bajó a 69% en 2016, pero sin ir acompañado de una significativa reducción de la sobrepoblación carcelaria.

<sup>63</sup> Defensoría del Pueblo (2013) "Información relevante sobre personas privadas de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia", en [http://www.defensoria.gob.bo/sp/datos\\_personas\\_privadas\\_libertad.asp](http://www.defensoria.gob.bo/sp/datos_personas_privadas_libertad.asp).

---

<sup>64</sup> Barómetro de las Américas (2012), citado en PNUD (2013) "Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina", Nueva York, pp.146-147.

<sup>65</sup> Fundación UNIR, op.cit., p.136.

<sup>66</sup> Idem, p.138.

<sup>67</sup> Boccara, B. (2013) "Bolivia: Revirtiendo traumas", La Paz: CERES/Plural editores, pp.38-39.

revolución con una compulsión a repetir que puede impactar negativamente en la elaboración de políticas<sup>68</sup>. Desde esta perspectiva cabe revisar un importante antecedente del actual proceso de cambio: la Revolución Nacional de 1952. Según resumió un estudioso de dicho impulso revolucionario, este: “nacionalizó las tres mayores compañías mineras, hizo una reforma agraria radical, estableció el sufragio universal y fortaleció a los sindicatos de trabajadores y campesinos, que ocuparon posiciones clave en el Gobierno y en las empresas públicas<sup>69</sup>; mientras su posterior declinación se debía entre otros factores a las inicialmente débiles capacidades de gestión administrativa, las restrictivas condiciones del mercado laboral, y el impacto de clivajes internos en torno a la distribución de posiciones de poder y diferencias ideológicas sobre la manera de abordar desafíos de orden internacional<sup>70</sup>”.

En la actual coyuntura todos estos elementos están presentes y hay quienes, con reconocimiento de matices, inscriben a la principal base de inspiración de las políticas del MAS en “la vieja tradición boliviana del nacionalismo<sup>71</sup>”. En ambos momentos de la historia boliviana una crisis de Estado precipitó al vacío al sistema de partidos políticos permitiendo una significativa irrupción directa de nuevos actores en los espacios políticos institucionales quienes, se observa, actúan con similitudes elocuentes como son: “la apelación a la unidad de clases y sectores sociales distintos articulados bajo la categoría de ‘pueblo’, la identificación de un enemigo de ese pueblo que permite una sólida aglutinación de las fuerzas propias en su defensa, la cooptación de las organizaciones sindicales y de otras organizaciones sociales –y su división cuando no pueden ser controladas<sup>72</sup>. En el período de 1952 a 1957 esta lógica prebendal y la resultante burocratización de la dirigencia sindical, llevaron eventualmente a preservar una estructura de Estado basada en la dominación de clase y la exclusión de sectores sociales. También en relación al segundo período de gobierno del MAS se ha observado que: “se mantienen los parámetros de organización política del modelo liberal representativo anterior, sin tocar la estructura política, el estilo de la representación ni la mediación partidaria como dispositivo predominante de la representación<sup>73</sup>. Esta última característica distorsiona la representación parlamentaria indígena porque se considera que sus intereses están representados en las decisiones

del partido<sup>74</sup>. Se cuestiona en especial “el carácter eminentemente corporativo del MAS (que) definió no solo su composición interna, sino también su conducta política (...) las necesidades e intereses de esos sectores insertos en la economía capitalista, coccaleros, colonizadores, pequeños campesinos, gremiales y transportistas, establecieron el alcance del accionar del MAS<sup>75</sup>. La perspectiva del bien común cede ante los intereses particulares de estos sindicatos y gremios, en la medida en que logran activar sus respectivos recursos de poder que residen “por una parte en su capacidad de influencia en las altas esferas de poder (...) o bien en la fuerza de las bases por su capacidad movilizadora para presionar al gobierno<sup>76</sup>. En esta dinámica de permanente forcejeo entre sectores aparece la figura de Evo Morales, a la vez Presidente y dirigente sindical, como un factor clave de canalización, contención y decisión. Como ha relatado un diputado del MAS, su bancada se reúne todos los martes con Morales “o ante su ausencia con el vicepresidente (...) y en) ese ámbito, se discuten los proyectos de ley que van a presentar y tratar (...) de manera que en las plenarios éstas no se sometan a una discusión abierta sino que se procede directamente a su presentación y aprobación<sup>77</sup>. En casos extremos de desacuerdo interno, el partido también aplica sanciones contra su disidencia.

*En esta dinámica de permanente forcejeo entre sectores aparece la figura de Evo Morales, a la vez Presidente y dirigente sindical, como un factor clave de canalización, contención y decisión.*

En cuanto a su enfoque de la cuestión identitaria, el proyecto del MAS difiere del nacionalismo revolucionario de 1952. Este pretendía “eliminar el modelo de lo boliviano centrado en las élites blancas-criollas, sustituyéndolo por uno asentado sobre la figura del mestizo (...para) resolver el problema de la desigualdad existente en el país y avanzar en la construcción de una nación de ciudadanos<sup>78</sup>. Ello explica la poca relevancia que los forjadores de dicha revolución, hoy concentrados en el sindicalismo minero, conceden a un proceso de descolonización étnico-cultural: “su adhesión a la causa indígena es sobre todo emocional y circunstancial y no implica una verdadera aceptación de ese programa de transformaciones<sup>79</sup>. En cambio, la propuesta identitaria que ayudó a impulsar al gobierno del MAS se asienta en una crítica a la noción del multiculturalismo que ha sido

<sup>68</sup> Idem, p.62.

<sup>69</sup> Whitehead, L. (2009) “La última ‘refundación’ de Bolivia: ¿Qué tan original?” en Crabtree, J., Gray Molina, G., y Whitehead, L. (eds.) *Tensiones irresueltas. Bolivia, pasado y presente*, La Paz: Plural/PNUD, p.292.

<sup>70</sup> Idem, pp.295-297.

<sup>71</sup> Morales, J.A. (2009) “Bolivia en el Mundo: sus relaciones económicas internacionales”, en Crabtree et al., op.cit., p.258.

<sup>72</sup> Quiroga, M.S. (2014) “El sector minero en perspectiva histórica: trayectoria del actor sociopolítico”, en Quiroga, M.S. y Avejera, J., op.cit., p.21.

<sup>73</sup> Zegada, M.T. y Komadina, J. (2014) “El espejo de la sociedad. Poder y representación en Bolivia”, La Paz: CERES/Plural editores, p.250.

<sup>74</sup> Chávez, P. (2012) “¿De la colorida minoría a una gris mayoría? Presencia indígena en el Legislativo”, La Paz: Friedrich Ebert Stiftung/Editorial Gente Común, p.156.

<sup>75</sup> Quiroga, art.cit., p.20.

<sup>76</sup> Zegada y Komadina, op.cit., p.225.

<sup>77</sup> Idem, p. 183.

<sup>78</sup> Fundación UNIR, op.cit., p.30.

<sup>79</sup> Quiroga, art.cit., p.24.

promovida desde los años 1990 “más como un discurso de Estado, de los organismos internacionales y de los intelectuales, que como una efectiva forma de reconocimiento de la diversidad cultural”<sup>80</sup>. En consecuencia, el discurso ‘plurimulti’, si bien ayudó a generar nuevas dinámicas de inclusión social, “implicaba también, y por lo mismo, la aplicación de un freno a las luchas indígenas de carácter transformador”<sup>81</sup>. La reivindicación identitaria tiende a fragmentar, por lo que su irrupción en la política nacional a partir del 2000 planteaba un reto a la propuesta de cambio del MAS. Sin embargo, “puesto que el movimiento indígena no construyó una opción ideológico-política con capacidad hegemónica (...) el MAS pudo asumir la demanda nacional de contenido indígena”.<sup>82</sup>

---

*El discurso ‘plurimulti’, si bien ayudó a generar nuevas dinámicas de inclusión social, “implicaba también, y por lo mismo, la aplicación de un freno a las luchas indígenas de carácter transformador.*

---

Sobre la capacidad y calidad de gestión del Estado Plurinacional en relación a la conflictividad se ha observado que muchas recurrentes deficiencias de gestión que llevan a la ‘incubación del conflicto’ se originan en prácticas habituales del funcionariado en los diversos ámbitos y niveles. Es común que un problema o conflicto no encuentra una vía de solución o un temprano reconocimiento porque los funcionarios públicos aplican diversas estrategias para rehuir las responsabilidades que deberían o podrían asumir<sup>83</sup>. Es probable que ello se asocie con preocupaciones por mantenerse en el puesto y con la dominante presencia en la cultura pedagógica boliviana de respuestas castigadoras ante errores, faltas y desvíos de la norma.

## **ESCENARIOS, PERSPECTIVAS Y ACTORES DE CAMBIO**

### ***Conflictividad, radicalización y perspectivas de cambio***

Entre los aspectos contradictorios que presenta la conflictividad boliviana se destacan los niveles de radicalización y violencia. Desde una perspectiva histórica se ha adjudicado la baja incidencia de violencias de mayor escala en el período democrático boliviano a la presencia

operativa de un *modus vivendi* político basado en alianzas de poder entre élites débiles y actores sociales fuertes. El resultado sería un constitucionalismo popular institucionalizado en el que las movilizaciones populares impulsan cambios sociales que el constitucionalismo internaliza, preparando el terreno para nuevas luchas<sup>84</sup>. Esta forma de hacer política “evita violencia pero no resuelve cuestiones sociales y económicas pendientes”<sup>85</sup>. Una lectura más coyuntural asocia la pronta radicalización de muchos conflictos en Bolivia con la actual configuración de poderes, en la que “(e)l MAS ha ocupado el centro del campo político, controla casi la totalidad de las instituciones estatales, pero además ha construido eficientes mecanismos políticos para controlar a las organizaciones sociales estratégicas (...) y no existen espacios políticos que permitan una interacción no-instrumental entre el Estado y las organizaciones que conforman la sociedad civil”<sup>86</sup>.

De otra parte, en especial la actividad minera genera escenarios de conflicto explosivos de tipo horizontal (entre sectores sociales de una misma clase social)<sup>87</sup>, la mayoría por disputas sobre áreas de explotación. En estos casos se advierte que “la falta de una oportuna atención, la convergencia de intereses de actores sobre un mismo yacimiento, la efectividad de interpelación que concede la violencia son elementos que (...) dan lugar a que los conflictos se disparen con mucha facilidad”<sup>88</sup>; y que sus protagonistas recurren a menudo desde un principio a medidas radicales como la ocupación de minas o la toma de rehenes. Tanto la pasada coyuntura de precios internacionales altos como su reciente contracción son señaladas como factores que incentivan estos campos de conflictividad<sup>89</sup>. De 2006 a 2015 se han manifestado varios casos emblemáticos de disputas entre trabajadores de la minería estatal y mineros cooperativistas, y entre este último sector y comunidades próximas a las minas, cuyos pobladores (especialmente en el caso del oro) persiguen una oportunidad de participar en la bonanza. Si bien esta conflictividad se manifiesta en forma horizontal, el partido de gobierno participa en su gestación, sobre todo por las alianzas políticas con la minería cooperativizada, la que cosecha una importante formalización de privilegios en dispositivos legales. Esta corresponsabilidad quedó manifiesta en las violentas confrontaciones de agosto de 2016 en las que el Viceministro Rodolfo Illanes perdió la vida, luego de haber sido tomado rehén por un grupo de mineros cooperativistas que no estaban dispuestos a perder dichos privilegios en una coyuntura económica menos favorable. En ese entendido, el luctuoso desenlace de Panduro dejó al menos una lección, al poner en evidencia los límites de una gestión política anclada en la prebenda.

---

<sup>84</sup> Gray Molina, G. (2009) “Relaciones Estado/sociedad en Bolivia: la fuerza de la debilidad”, en Crabtree et al., op.cit., pp.126; 135-138.

<sup>85</sup> Idem, p.139.

<sup>86</sup> Komadina, op.cit., pp.6; 9.

<sup>87</sup> Rojas, C., op.cit., p.65.

<sup>88</sup> Arze, A., art.cit., p.60.

<sup>89</sup> Avejera, J. (2014) “La veta del conflicto: una introducción”, en Quiroga y Avejera, op.cit., pp.8-9.

---

<sup>80</sup> Zegada et al., op.cit., p. 32, citando a Bello (2004).

<sup>81</sup> Fundación UNIR, op.cit., p.31.

<sup>82</sup> Quiroga, art.cit., p.20.

<sup>83</sup> Rojas, C., op.cit., pp.91-92.

La radicalización y explosividad de un campo de conflicto ciertamente aumentan su visibilidad y las posibilidades de recibir algún tipo de atención pero como tal, también son factores de distracción que ofuscan su entendimiento profundo y obstaculizan una real resolución. En ello coinciden muchos observadores, pero sus lecturas interpretativas se bifurcan con respecto a la ubicación del conflicto social en el contexto del relacionamiento entre Estado y sociedad, llevando a propuestas contrastantes en cuanto a perspectivas y prioridades de cambio. Por un lado se plantea, desde un enfoque que es identificado como 'generativo y transformativo', que los mayores desafíos por atender en la actual conflictividad boliviana serían: primero, su alto grado de normalización, desde una cultura "donde el uso y la costumbre es recurrir a la presión social (...y) los sectores sociales marchan, luego existen"<sup>90</sup>, y en el que prevalece una 'mentalidad suma cero' que busca salidas donde necesariamente una de las partes gana y la otra pierde; y segundo, los patrones típicos de su incubación, manifestación, radicalización y disolución sin llegar a una solución duradera, que tienen que ver ante todo con una gestión precaria<sup>91</sup>. En este marco, se plantea la necesidad de mejorar tanto la gestión estratégica como la gestión táctica de la conflictividad. La mejor gestión estratégica tendría que llevar a un 'ascenso sistémico' ("mejoras progresivas y sostenidas en los rendimientos y en el funcionamiento de los subsistemas económico, social, político e institucional"<sup>92</sup>), y a una 'refuncionalización' de la relación Estado-sociedad, con menos movilizaciones por disputas o protestas; mientras que la mejor gestión táctica implicaría: activar y potenciar capacidades y mecanismos de "prevención, resolución, postconflicto y diálogo productivo"<sup>93</sup>.

Por el otro lado están las perspectivas que no concuerdan con la necesidad de aminorar la movilización y la presión social y que parten más bien de una conflictividad que *en esencia* expresa disputas por recursos de poder, *necesariamente* se sitúa en el centro de la relación Estado-sociedad, y *de hecho* "implica reportorios de movilización, es decir, acciones directas que varían en grado e intensidad"<sup>94</sup>. En este marco interpretativo el conflicto es "socialmente útil, pues precisamente en momentos críticos, tienden a disminuir las resistencias (al cambio) y se abren posibilidades de transformación"<sup>95</sup>.

### **Actores, campos de conflicto y potencial de cambio**

Ambas estas perspectivas de transformación de la conflictividad permiten identificar actores y campos de conflicto con potencial para ayudar a producir cambios (con un horizonte de sociedades menos violentas, justicia social y una paz duradera), o más bien, para obstaculizarlos. Para ello, resulta útil un breve análisis de la respuesta desde la

sociedad boliviana ante dos de los factores de conflictividad que hoy tienen especial relevancia: la favorable coyuntura económica, y el predominante uso instrumental de tácticas de disuasión y contención en la gestión del conflicto social. Esta sección presenta dicho análisis en tres partes, respectivamente enfocadas en los protagonismos ciudadanos de la investigación crítica, de movimientos sociales, y del universo de organizaciones, agrupaciones y redes no gubernamentales. Cada parte cierra con un resumen de conclusiones que a su vez, fundamentan una formulación tentativa de recomendaciones.

#### **(a) Investigación crítica**

Como ya señalado, el sostenido mayor ingreso de divisas por la exportación de materias primas, por un lado incentiva múltiples campos de conflicto de tipo redistributivo, mientras que la permanente disponibilidad de recursos líquidos, también ayuda a prevenir, mitigar, neutralizar y postergar conflictos. Observadores críticos sostienen que para generar un cambio estructural y sustentable, los actuales fondos fiscales han de ser mejor aprovechados, y plantean la necesidad de una reorientación de la economía nacional que priorice en mucho mayor medida: primero, a su diversificación (potenciamiento de sectores generadores de empleo y de la producción de alimentos de consumo interno); y segundo, a la industrialización de los propios sectores generadores de divisas (para producir mayor plusvalía). Con el tiempo ello permitiría revertir la actual mayor dependencia de la exportación de materias primas, demandas y precios internacionales, empresas transnacionales, agroindustrias con productos transgénicos, y alimentos importados; y crear condiciones para el postulado ascenso sistémico y

---

*Observadores críticos sostienen que para generar un cambio estructural y sustentable, los actuales fondos fiscales han de ser mejor aprovechados.*

---

mejor gestión estratégica de la conflictividad (en la medida que se vayan desactivando los campos de conflicto de mayor impacto). En una perspectiva de mediano plazo se manifestaron además preocupaciones por la posibilidad de un cercano agotamiento de las reservas gasíferas, cuya explotación genera cerca de la mitad del valor de exportaciones del país y por ello, cumple un rol estabilizador esencial. Una publicación de 2013 pronosticó, con base en datos oficiales de reservas probadas, consumo interno y compromisos de exportación, que sin una eficaz mayor inversión en nuevas exploraciones, el gas boliviano podría agotarse hasta el año 2020<sup>96</sup>, mientras un anterior estudio planteó que la drástica reducción en la certificación de reservas probadas de gas entre 2005 y 2010, se debía ante todo a una irracional explotación de yacimientos en aras de cumplir con los compromisos de exportación a Brasil y

---

<sup>90</sup> Rojas, C., op.cit., p.83.

<sup>91</sup> Idem, p.84.

<sup>92</sup> Idem, p.140.

<sup>93</sup> Idem, p.106.

<sup>94</sup> Zegada (2014), art.cit.

<sup>95</sup> Idem, según Morin, E. (2002).

---

<sup>96</sup> Arze, C. (2013), op.cit., p.7.



Argentina<sup>97</sup>. Quizás en parte en respuesta a estas alertas, el plan quinquenal 2015-2019 de la empresa estatal petrolífera YPFB prevé una significativa inversión en nuevas exploraciones de gas; y a partir de 2015 la prensa boliviana informa sobre nuevos descubrimientos de reservas de gas y petróleo que, según se señala, tienen capacidad “para abastecer sin problema hasta 2025, tanto a los mercados de exportación como al interno”<sup>98</sup>.

Afortunadamente el aporte crítico desde la investigación independiente enriquece el debate nacional de múltiples maneras. Pero, también hay importantes temas que parcial o íntegramente son pasados por alto. Tal como sucede en otras partes, pocos se animan a indagar sobre los entretelones superiores del negocio de la cocaína y sus vínculos con la economía lícita. Otra temática escasamente dilucidada con ojo crítico, es la revigorizada campaña gubernamental para lograr que Chile reconozca el postulado derecho boliviano a un acceso propio y directo a la costa pacífica. En este caso, el debate público muestra una particular tendencia a potenciar la (por décadas) naturalizada asociación entre el reclamo por el mar y el ‘orgullo de saberse boliviana/o’. Ello impulsa a la población a desestimar de entrada a una hipótesis que plantea que el gobierno de Morales –igual que gobiernos anteriores– pueda estar haciendo un uso táctico de este tema de gran impacto en el subconsciente boliviano para, apelando a la conciencia colectiva en un momento especialmente crítico, desviar la atención de determinados problemas internos o neutralizar sentimientos encontrados sobre los mismos.

**Sobre el protagonismo desde la investigación crítica:**

En los comentarios, alertas y cuestionamientos en torno a la conducción de la economía nacional, se advierte la necesidad de facilitar un óptimo cumplimiento de la importante función de la investigación crítica e independiente. Y así apoyar el postulado enriquecimiento y potenciamiento del proceso de cambio mediante una observancia ciudadana constructiva sobre la conducción del mismo por parte del gobierno y la evolución de temas clave de la agenda política del país.

**(b) Movimientos sociales**

En su gestión táctica de los campos de conflicto de potencial trascendencia (por ejemplo, los que se motivan en actividades extractivas en territorio indígena, costos de vida, o condiciones laborales), el gobierno boliviano habitualmente recurre a instrumentos de cooptación, división y amedrentamiento. La cooptación de líderes,

dirigentes u organizaciones permite convertir declarados enemigos estratégicos en aliados, mientras que los otros apuntan a su debilitamiento, directa o indirectamente (atacando aliados y/o alianzas). Un pacto firmado en el período pre-electoral de 2014 entre el MAS y la Central

---

*Los dirigentes máximos fracasaron rotundamente en su intento de movilizar a los vecinos porque éstos ya no creen en ellos.*

---

Obrera Boliviana (COB), evidenció la cooptación de todo un movimiento considerado de valor estratégico en cuanto a su potencial (o riesgo) para impulsar un cambio mayor. El acuerdo estableció la inclusión de cinco altos dirigentes obreros en las listas de candidatos del MAS, a tiempo de renovar el control oficialista sobre un actor de gran peso político y trayectoria de lucha que, un año antes, aún había articulado una ola de movilizaciones en todo el país con demandas acumuladas en torno a salarios y derechos de jubilación. Sin embargo, otro caso más reciente muestra la existencia de límites inherentes a este tipo de cooptación. En abril de 2015, días después de las elecciones municipales, la máxima dirigencia de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto convocó sus bases para movilizarse en contra del nombramiento directo de subalcaldes por parte de la alcaldesa electa. En años pasados los sucesivos alcaldes de El Alto (todos adscritos al MAS) dejaron que sus subalcaldes fueran designados por dirigentes barriales, “quienes en medio de acuerdos subterráneos los eligen en amplios distritales, donde solo participan los presidentes”<sup>99</sup>; dando lugar a prácticas clientelares y el ‘cuoteo’ de cargos administrativos municipales que con la reciente elección de una candidata de la oposición, llegaron a un abrupto fin. Los dirigentes máximos fracasaron rotundamente en su intento de movilizar a los vecinos porque éstos ya no creen en ellos, y “ni los mecanismos de coacción ejercida a través de las multas y sanciones ya funcionan para convocarlos”<sup>100</sup>. De esta manera, un otrora poderoso movimiento social<sup>101</sup> que perdió el rumbo de la reivindicación colectiva y con ello su identidad contestataria, recibió una clara señal desde sus bases, quienes se han convertido en potenciales nuevos (o mejor: renovados) actores de cambio para una futura recuperación de su autonomía, razón de ser y relevancia como movimiento social.

El devenir de organizaciones como la COB (nacional) y

<sup>97</sup> Rodríguez, G. “Están matando a la gallina de los huevos de oro” [en línea], en *Petropress*, No. 23, 14-03-2011), Cochabamba: CEDIB, <https://petropress.wordpress.com/2011/03/14/estando-matando-a-la-gallina-de-los-huevos-de-oro-por-gustavo-rodriguez-c/>

<sup>98</sup> Hugo de la Fuente, ex superintendente de Hidrocarburos, en: “Expertos: para vender gas a Perú se precisan más reservas”, *Página Siete* 25-06-2015, <http://www.paginasiete.bo/economia/2015/6/25/expertos-para-vender-peru-precisan-reservas-61080.html>.

<sup>99</sup> David Ali Condori, ex dirigente de Fejuve en El Alto, en Bustillos, I. “El Alto, crisis de una organización social en el poder”, *La Razón* 13-06-2015, [http://m.la-razon.com/suplementos/animal\\_politico/Alto-crisis-organizacion-social-poder\\_0\\_2288771176.html](http://m.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Alto-crisis-organizacion-social-poder_0_2288771176.html)

<sup>100</sup> Idem.

<sup>101</sup> La Fejuve de El Alto jugó un rol clave en las protestas que llevaron a la destitución de Sánchez de Lozada en 2013 y de Carlos D. Mesa en 2015 (ver recuadro 1).

Fejuve (local) en su capacidad contra-hegemónica (retar a un orden establecido en aras de llegar a otro mejor) plantea una importante pregunta: ¿dónde están los actores con capacidad de generar los contrapoderes que requiere la permanente renovación y profundización del proceso democrático<sup>102</sup> de cambio? Hay quienes sostienen que solo “los indígenas y sectores medios de izquierda, aún (siguen siendo) portadores del proyecto de descolonización”<sup>103</sup>, y cabe observar que son precisamente estos grupos de actores que en los últimos años se han convertido en blancos estratégicos de una serie de acciones de división y amedrentamiento a manos del gobierno boliviano y movimientos sociales aliados.

Así en 2012, en días finales de la movilización indígena en defensa del TIPNIS (ver arriba), fuerzas políticas asociadas al MAS impulsaron un cuestionado relevo de la máxima dirigencia de CIDOB, la confederación de organizaciones indígenas que coordinaba la protesta. La consiguiente ocupación de sedes y oficinas terminó por sellar una división de la organización en dos confederaciones indígenas paralelas: una CIDOB ‘oficial’ vinculada al MAS, y una CIDOB ‘orgánica’ autónoma. De la misma manera, en diciembre de 2013, le tocó el turno a CONAMAQ, la confederación de organizaciones indígenas del occidente que en el curso del conflicto por el TIPNIS y a partir de experiencias propias con la incursión de industrias extractivas en sus comunidades, había ido asumiendo posturas cada vez más críticas hacia las políticas gubernamentales.

Las maniobras políticas y comunicacionales que buscan coartar el funcionamiento de ambas estructuras ‘orgánicas’ continúan hasta hoy, dejando sensibles impactos en sus capacidades de organización y condiciones de trabajo. Sin embargo, estos movimientos indígenas y las organizaciones (regionales y de mujeres) que los integran, cuentan con un importante arsenal de recursos propios para seguir forjando su elegido camino como referentes contra-hegemónicos. Considerando el acelerado impulso a políticas y normativas que privilegian a la industria extractiva y facilitan la incursión de empresas transnacionales en territorios indígenas ‘protegidos’, se avecina un futuro con múltiples campos de conflicto (nuevos y antiguos), en el que se volverá a recurrir a su importante capacidad de liderazgo colectivo y experiencia de movilización<sup>104</sup>.

#### **Sobre el protagonismo desde los movimientos sociales:**

Las comentadas respuestas de movimientos sociales estratégicos ante prácticas clientelares y de cooptación por una parte, y el uso de instrumentos como la división política y el amedrentamiento por otra, validan la necesidad de una permanente revisión y renovación de dirigencias y formas de liderazgo ‘desde las bases’, en resguardo de su capacidad e identidad colectivas como forjadores centrales y esenciales del proceso de cambio.

#### **(c) Espacio político para ONGs**

En casos extremos las acciones de amedrentamiento llegan a judicializar a la protesta y entre sus blancos estratégicos, cabe señalar, no sólo se encuentran dirigentes, líderes y movimientos sociales ‘difíciles de convencer’ sino también, quienes apoyan a estos de cerca. Un ejemplo emblemático fue la expulsión de IBIS, Organización No Gubernamental (ONG) de Dinamarca con varias décadas de actividades en el país. En diciembre de 2013, el Gobierno boliviano responsabilizó a IBIS de promover la división en movimientos indígenas como CIDOB y CONAMAQ. Las disculpas públicas que esta ONG danesa publicó en respuesta, “no tuvieron

#### *En particular ‘las ONGs’ han sido objeto de un insistente cuestionamiento oficial.*

mayor efecto, y han contribuido más bien a que instituciones y organizaciones adopten un perfil bajo con pocos niveles de discrepancia pública, como deseaba el Gobierno<sup>105</sup>. En particular ‘las ONGs’ han sido objeto de un insistente cuestionamiento oficial. En agosto de 2015, días después de que cuatro centros bolivianos con investigaciones independientes sobre temas críticos de la agenda nacional habían sido acusados por el vicepresidente de mentir para favorecer a intereses extranjeros<sup>106</sup>, el presidente Morales sostuvo que “(...) no hay mucha pobreza no hay razón de existencia de las ONG. Ahora el Estado está presente en todas las regiones”<sup>107</sup>; y que “cualquier ONG o fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia”<sup>108</sup>. Estas declaraciones de los dos máximos exponentes del gobierno boliviano expresan una postura sumamente cerrada frente a la posibilidad de una franca y dialogada interacción con (nuevas) fuerzas contra-

<sup>102</sup> Según Rosanvallon, op.cit.

<sup>103</sup> Quiroga, art.cit., p.24.

<sup>104</sup> El señalado nuevo impulso gubernamental a la exploración de fuentes de gas y petróleo, conlleva una expansión de actividades extractivas en territorio indígena. Los decretos promulgados para posibilitar esa expansión aumentan de 6 a 11 el número de áreas protegidas (de las 22 que existen) que están comprometidas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Los nuevos decretos también delimitan el derecho de los pueblos indígenas a la consulta para estas actividades (“Cedib: actividades hidrocarburíferas afectarán al 17% de áreas protegidas”, en *Erbol* 21-06-2015, [http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/21062015/cedib\\_actividades\\_hidrocarburiferas\\_afectaran\\_al\\_17\\_de\\_areas\\_protegidas](http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/21062015/cedib_actividades_hidrocarburiferas_afectaran_al_17_de_areas_protegidas)).

<sup>105</sup> “Antropólogo Xavier Albó: El MAS fomentó la división en la CIDOB y el CONAMAQ”, en *Erbol* 21-05-2014, [http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/21052014/el\\_mas\\_fomenta\\_la\\_division\\_en\\_la\\_cidob\\_y\\_el\\_conamaq](http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/21052014/el_mas_fomenta_la_division_en_la_cidob_y_el_conamaq).

<sup>106</sup> Acusaciones del vicepresidente boliviano en contra de CEDIB, Fundación Tierra, CEDLA y Fundación Milenio.

<sup>107</sup> “Morales cuestiona existencia de ONG tras reducir la pobreza”, en *Opinión* 21-08-2015, <http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2015/0821/noticias.php?id=168870>.

<sup>108</sup> *Erbol* 21-06-2015, art.cit.

hegemónicas consolidadas o en etapa de gestación. Ello pone un serio condicionante a eventuales iniciativas para una mejor gestión táctica de la conflictividad mientras a la vez, las hace más necesarias.

Sin embargo, es importante señalar que en este último caso, contrario a lo que hizo IBIS, tanto las organizaciones aludidas como sus aliados y las redes a las que pertenecen, acudieron en defensa propia y de los derechos ciudadanos a la libre opinión, expresión, y asociación para el trabajo. La directora de Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), a tiempo de denunciar una evidente práctica de control estatal en el proceso de implementación de la obligada renovación de personerías jurídicas decretada en 2013<sup>109</sup>, dijo que con las declaraciones en contra de las cuatro ONGs se estaba amenazando “al pueblo boliviano que recibe el apoyo de estas organizaciones para el desarrollo de varios proyectos (...) y a) la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas (...)”<sup>110</sup>.

***Sobre el protagonismo desde el universo de organizaciones y redes no gubernamentales:***

La relatada evolución de prácticas de amedrentamiento en contra de organizaciones independientes y críticas, señala una urgente necesidad de operar en forma colectiva en protección de la legitimidad y plena legalidad del protagonismo ciudadano autónomo, y en garantía de condiciones óptimas para un trabajo de calidad y estratégicamente asociado con las dinámicas del cambio y la diversidad de actores involucrados.

---

<sup>109</sup> Hasta agosto de 2015 solo 250 de las 2.176 ONGs en Bolivia habrían logrado renovar su estatus legal.

<sup>110</sup> “Unitas: 250 de 2.176 ONG lograron renovar su personería jurídica”, en *El Diario* 12-08-2015, [http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015\\_08/nt150812/politica.php?n=86&-unitas-250-de-2-176-ong-lograron-renovar-su-personeria-juridica](http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_08/nt150812/politica.php?n=86&-unitas-250-de-2-176-ong-lograron-renovar-su-personeria-juridica).

## RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES FINALES

El análisis presentado en la anterior sección llevó a identificar necesidades y potencialidades en relación a tres tipos de aporte desde la sociedad organizada al proceso de cambio boliviano; que a la vez ayudarían a optimizar la gestión de la conflictividad social. Las mismas pueden ser leídas como recomendaciones, en orientación de posibles estrategias del protagonismo ciudadano:

1.- La necesidad de facilitar un óptimo cumplimiento de la función de la *investigación crítica e independiente* en apoyo a una permanente observancia ciudadana constructiva sobre la conducción del proceso de cambio y temas claves de la agenda política nacional.

2.- La necesidad de *movimientos sociales* de resguardar su capacidad e identidad colectivas para seguir siendo forjadores centrales del proceso de cambio, mediante una permanente revisión y renovación de dirigencias y formas de liderazgo 'desde las bases'.

3. La necesidad de operar en forma colectiva en protección de la legitimidad y legalidad del *protagonismo ciudadano autónomo* y en garantía de condiciones para un trabajo de calidad, estratégicamente asociado con las dinámicas del cambio y actores involucrados.

Cabe enfatizar que, si bien estas necesidades son presentadas de forma separada, se trata de un conjunto interrelacionado de condicionantes del cambio social. Su paulatina satisfacción requiere procesos que las consideren desde un enfoque integral, involucrando no sólo a los respectivos protagonistas identificados sino, al conjunto de actores estatales y no estatales que hacen el proceso de cambio en Bolivia y/o están en capacidad de incidir en él; y uno de los grandes desafíos comunes para quienes impulsan o apoyan iniciativas con un mayor protagonismo ciudadano es, determinar los mejores usos estratégicos de los varios recursos con los que ya cuenta la sociedad boliviana (por medios propios o ajenos) para una mejor gestión de la conflictividad<sup>111</sup>. En ese entendido, la condición coyuntural presentada líneas arriba, y en particular la actitud cerrada del gobierno boliviano frente a un potencial diálogo con fuerzas políticas alternas, lleva a plantear dos recomendaciones finales:

4.- La necesidad de establecer vínculos eficaces y permanentes entre quienes por un lado, cumplen funciones de observancia, monitoreo, análisis e investigación, y quienes por otro lado, intervienen en representación de la ciudadanía en los constitucionalizados mecanismos de participación y control social que hace poco comenzaron a funcionar. La articulación de estas dos funciones permitiría un mejor ejercicio del control social hacia el planteado objetivo de re-equilibrar las relaciones entre gobernantes y gobernados, y ayudaría a generar una mejor gestión estratégica del conflicto.

5.- La priorización del nivel local (sobre todo municipal) en la selección de ámbitos y escenarios para la instalación de programas, espacios y prácticas de capacitación que permitan una mejor gestión táctica del conflicto (prevención, resolución, postconflicto y diálogo productivo). Las observadas posturas atrincheradas en el ámbito político nacional no necesariamente predominan en los espacios locales, y sus actores posiblemente se muestren más dispuestos a contribuir a una verdadera transformación de la injusticia social y la resultante conflictividad en Bolivia.

---

<sup>111</sup> Recursos son, entre otros: experiencias pasadas evaluadas, programas de capacitación, espacios de deliberación multi-actor instalados, y el apoyo de organismos multilaterales. Entre las organizaciones con permanentes capacitaciones y prácticas instaladas en torno a la gestión de la conflictividad se destaca la Fundación UNIR ([www.unirbolivia.org](http://www.unirbolivia.org)). Un espacio de encuentro que UNIR recientemente ayudó a impulsar, la Comunidad de Práctica de Diálogo y Transformación de Conflictos, publica en su página ([www.conflictividad.org.bo](http://www.conflictividad.org.bo)) una interesante colección de documentos.

## BIBLIOGRAFÍA

- Argirakis, H. (2013) “*La reconfiguración del campo político boliviano*,” in Andamios, <http://www.gobernabilidad.org.bo/revista-andamios/con-textos/item/la-reconfiguracion-del-campo-politico-boliviano>
- Arze, A. (2014) “*La lógica del conflicto minero*,” in Quiroga, M.S. and Avejera, J. *La veta del conflicto. Ocho miradas sobre conflictividad minera en Bolivia (2010-2014)*, La Paz: Fundación UNIR, pp.53-80.
- Arze, C. (2013) “*‘Nacionalización’ de los hidrocarburos del gobierno del MAS: balance y perspectivas*,” in Hora 25, no. 104 (October), <http://cedla.org/content/42042>, pp.9-11.
- Arze, C. (2014) “*Agudización de la conflictividad laboral en la minería*,” in Quiroga, M.S. and Avejera, J. *La veta del conflicto. Ocho miradas sobre conflictividad minera en Bolivia (2010-2014)*, La Paz: Fundación UNIR, pp.127-156.
- Avejera, J. (2014) “*La veta del conflicto: una introducción*,” in Quiroga M.S. and Avejera, J. *La veta del conflicto. Ocho miradas sobre conflictividad minera en Bolivia (2010-2014)*, La Paz: Fundación UNIR, pp.7-10.
- Barómetro de las Américas (2012), cited in UNDP “*Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina*,” Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, New York, pp.146-147.
- Bello, A. (2004) “*Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos indígenas*,” Santiago de Chile: CEPAL/GTZ.
- Boccaro, B. (2013) “*Bolivia: Revirtiendo traumas*,” La Paz: CERES/Plural editores.
- Calderón, F. (1986) (coord.) “*Los movimientos sociales ante la crisis*,” Buenos Aires: CLACSO/UNU.
- Central Bank of Bolivia - BCB (2014) “*Principales logros económicos y sociales 2006-2013*,” La Paz.
- Chávez, P. (2012) “*¿De la colorida minoría a una gris mayoría? Presencia indígena en el Legislativo*,” La Paz: Friedrich Ebert Stiftung/Editorial Gente Común.
- Coleman, J. (1990) “*Foundations of social theory*,” Cambridge Harvard University Press.
- Corporación Latinobarómetro (2013) “*Informe 2013*,” Santiago de Chile.
- Coser, L. (1961) “*Las funciones del conflicto social*,” México/Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean ECLAC, International Labor Organization ILO (2014) “*Formalización del empleo y distribución de los ingresos laborales*,” Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, No. 11, Santiago de Chile, p.16.
- Farah, I., Sánchez, C. y Wanderley, F. (2009) “*Políticas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes en el Estado Plurinacional de Bolivia*,” Santiago de Chile: CEPAL-ONU/ASDI.
- Fundación Milenio (2014) “*Informe de Milenio sobre la economía. Gestión 2013*,” La Paz.
- Fundación UNIR (2012) “*Perfiles de la conflictividad social en Bolivia (2009-2011). Análisis multifactorial y perspectivas*,” La Paz.
- Gray Molina, G. (2009) “*Relaciones Estado/sociedad en Bolivia: la fuerza de la debilidad*,” in Crabtree, J., Gray Molina, G. and Whitehead, L. (Eds.) *Tensiones irresueltas. Bolivia, pasado y presente*, La Paz: Plural/PNUD, pp.125-144.
- Komadina, J. (2012) “*Conflictos y desafíos políticos e institucionales del segundo gobierno de Evo Morales*,” Cochabamba: UNDP/FBDM.
- Komadina, J. and Regalsky P. (2014) “*El movimiento afroboliviano*” (not published), Cochabamba.

- Morales, J.A. (2009) “*Bolivia en el Mundo: sus relaciones económicas internacionales*,” in Crabtree, J., Gray Molina, G. and Whitehead, L. (Eds.) *Tensiones irresueltas. Bolivia, pasado y presente*, La Paz: Plural/PNUD, pp.237-267.
- Morin, E. (2002) “*Introducción a una política del hombre*,” Barcelona: Gedisa.
- Office of the Ombudsman (2013) “*Información relevante sobre personas privadas de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia*,” La Paz, Defensoría del Pueblo, [http://www.defensoria.gob.bo/sp/datos\\_personas\\_privadas\\_libertad.asp](http://www.defensoria.gob.bo/sp/datos_personas_privadas_libertad.asp).
- Quiroga, M.S. (2014) “*El sector minero en perspectiva histórica: trayectoria del actor sociopolítico*,” in Quiroga M.S. and Avejera, J. *La veta del conflicto. Ocho miradas sobre conflictividad minera en Bolivia (2010-2014)*, La Paz: Fundación UNIR, pp.11-32.
- Rodríguez, G. (2011) “*Están matando a la gallina de los huevos de oro*,” en Petropress, No. 23, March 14, 2011, Cochabamba: CEDIB, <https://petropress.wordpress.com/2011/03/14/están-matando-a-la-gallina-de-los-huevos-de-oro-por-gustavo-rodriguez-c/>.
- Rojas, B. (2015) “*Sembrar para cosechar poco: balance de las políticas de empleo juvenil en Bolivia*,” La Paz: CEDLA, <http://www.cedla.org/content/47744>.
- Rojas, C. (2015) “*Conflictividad en Bolivia (2000-2014). ¿Cómo revertir la normalización de la presión social?*,” La Paz: Friedrich Ebert Stiftung.
- Rosanvallon, P. (2007) “*La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza*,” Buenos Aires: Manantial.
- Sandi, E. (2014) “*Minería, desarrollo y conflictividad social*,” in Quiroga, M.S. y Avejera, J. (2014) *La veta del conflicto. Ocho miradas sobre conflictividad minera en Bolivia (2010-2014)*, La Paz: Fundación UNIR, pp.33-52.
- Sampson, R. (1996) “*The Community*,” in Wilson, J.Q. and Petersili, J. (Eds.) *Crime*. San Francisco: Institute for Contemporary Studies, pp.193-216.
- Sarti, C. and Aguilar, C. (2006) “*La conflictividad guatemalteca y su abordaje constructivo*,” Guatemala: Fundación Propaz/IBIS/Netherlands Embassy.
- United Nations Development Program UNDP (2010) “*Los cambios detrás del cambio. Desigualdades y movilidad social en Bolivia*,” Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia, La Paz.
- United Nations Development Program UNDP (2013) “*Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina*,” Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2013-2014, New York.
- Urioste, M. (2013) “*La expansión del agronegocio en Bolivia*,” in Nueva Crónica, no. 133, October 29, 2013, <http://www.nuevacronica.com/economia/la-expansion-del-agronegocio-en-bolivia/>.
- Wacquant, L. (2009) “*Castigar a los pobres*,” Barcelona: GEDISA.
- Wanderley, F. “*Más calificación, menor remuneración: la nueva realidad laboral en Bolivia*,” November 06, 2014, at: <http://fernandawanderley.blogspot.com/search/label/Pobreza>.
- Whitehead, L. (2009) “*La última ‘refundación’ de Bolivia: ¿Qué tan original?*” in Crabtree, J., Gray Molina, G., and Whitehead, L. (Eds.) *Tensiones irresueltas. Bolivia, pasado y presente*, La Paz: Plural/PNUD, pp.285-298.
- Zegada, M.T., Arce, C., Canedo, G. and Quispe, A. (2011) “*La democracia desde los márgenes: transformaciones en el campo político boliviano*,” La Paz: Muela del Diablo/CLACSO.
- Zegada, M.T. (2014) “*Conflictos sociales, contenidos y sujetos en el proceso de cambio*,” at: <http://www.ceresbolivia.org/archivos/1251>.
- Zegada, M.T. and Komadina, J. (2014) “*El espejo de la sociedad. Poder y representación en Bolivia*,” La Paz: CERES/Plural.

## ARTÍCULOS DE PRENSA CITADOS

Bustillos, I. "El Alto, crisis de una organización social en el poder," La Razón, June 13, 2015, [http://m.la-razon.com/suplementos/animal\\_politico/Alto-crisis-organizacion-social-poder\\_0\\_2288771176.html](http://m.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Alto-crisis-organizacion-social-poder_0_2288771176.html).

Carvajal, R. "Oro: Ni EBO ni la Aduana pueden con el contrabando," Erbol, December 19, 2013, [http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/19122013/oro\\_ni\\_ebo\\_ni\\_la\\_aduana\\_pueden\\_con\\_el\\_contrabando](http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/19122013/oro_ni_ebo_ni_la_aduana_pueden_con_el_contrabando).

El Día "Bolivia, con 'Muy alto riesgo' de rebelión para el 2014, según The Economist," December 23, 2013, [http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id\\_articulo=134842](http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=134842).

El Diario "Unitas: 250 de 2.176 ONG lograron renovar su personería jurídica," August 12, 2015, [http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015\\_08/nt150812/politica.php?n=86&-unitas-250-de-2-176-ong-lograron-renovar-su-personeria-juridica](http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_08/nt150812/politica.php?n=86&-unitas-250-de-2-176-ong-lograron-renovar-su-personeria-juridica).

Erbol "Bolivia es soberana en 28 productos de la canasta básica," October 17, 2013, [http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/17102013/bolivia\\_es\\_soberana\\_en\\_28\\_productos\\_de\\_canasta\\_familiar](http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/17102013/bolivia_es_soberana_en_28_productos_de_canasta_familiar)).

Erbol "Antropólogo Xavier Albó: El MAS fomentó la división en la CIDOB y el CONAMAQ," May 21, 2014, [http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/21052014/el\\_mas\\_fomento\\_la\\_division\\_en\\_la\\_cidob\\_y\\_el\\_conamaq](http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/21052014/el_mas_fomento_la_division_en_la_cidob_y_el_conamaq).

Erbol "Trabajadores aseguran que el Gobierno fracasó en Huanuni y Enatex," April 30, 2015, <http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/economia/153772/trabajadores-aseguran-que-el-gobierno-fracaso-en-huanuni-y-enatex.html>.

Erbol "Cedib: actividades hidrocarburíferas afectarán al 17% de áreas protegidas," June 21, 2015, [http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/21062015/cedib\\_actividades\\_hidrocarburiferas\\_afectaran\\_al\\_17\\_de\\_areas\\_protegidas](http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/21062015/cedib_actividades_hidrocarburiferas_afectaran_al_17_de_areas_protegidas) ).

La Razón "Los intereses de grupo activan conflictos sociales desde 2006," December 15, 2013, [http://www.la-razon.com/nacional/intereses-grupo-activan-conflictos-sociales\\_0\\_1961203964.html](http://www.la-razon.com/nacional/intereses-grupo-activan-conflictos-sociales_0_1961203964.html).

López, E. "Tras una década de repunte, las exportaciones se desploman," Los Tiempos August 03, 2016, <http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160803/decada-repunte-exportaciones-se-desploman>.

Opinión "Morales cuestiona existencia de ONG tras reducir la pobreza," August 21, 2015, <http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2015/0821/noticias.php?id=168870>.

Página Siete "Expertos: para vender gas a Perú se precisan más reservas," June 25, 2015, <http://www.paginasiete.bo/economia/2015/6/25/expertos-para-vender-peru-precisan-reservas-61080.html>.

Peralta, P. "¿Quién ganó, quién perdió en las elecciones subnacionales?," Página Siete, April 26, 2015, <http://www.paginasiete.bo/ideas/2015/4/26/quien-gano-quien-perdio-elecciones-subnacionales-54502.html>.

Rojas, G. "Informe de la ONU. Bolivia encabeza lista entre los países de Latinoamérica con más retardación de justicia," in Eju! August 27, 2013, <http://eju.tv/2013/08/informe-de-onu-bolivia-encabeza-lista-entre-los-pases-de-latinoamrica-con-ms-retardacin-de-justicia/>



# GPPAC Alert

**Theo Roncken** Psicólogo y coordinador de Acción Andina – Bolivia ([www.accionandina.org](http://www.accionandina.org)), plataforma que, junto a sectores sociales, impulsa iniciativas de investigación-acción sobre impactos de la globalización y respuestas locales ante sus fenómenos y políticas. Acción Andina es miembro de la **Plataforma Latinoamericana y Caribeña para la Prevención del Conflicto Armado y/o Violento y la Construcción de la Paz (PLAC-Paz)**.

Acción Andina elaboró este documento junto PLAC-Paz y la **Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales** (CRIES; [www.cries.org](http://www.cries.org)).

La **Asociación Mundial para la Prevención de Conflictos Armados / Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC)** es una red de organizaciones de la sociedad civil activas en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz en todo el mundo, promoviendo un cambio fundamental en la forma en que el mundo lidia con los conflictos violentos: pasando de la reacción a la prevención. Los miembros del GPPAC trabajan juntos para informar la política, mejorar la práctica y facilitar la colaboración entre la sociedad civil, las organizaciones intergubernamentales y los actores estatales.

GPPAC está compuesto por redes regionales de la sociedad civil en quince regiones y coordina grupos de trabajo y proyectos temáticos globales.



Acción Andina

Casilla 5471  
Cochabamba  
Bolivia

[www.accionandina.org](http://www.accionandina.org)  
[info@accionandina.org](mailto:info@accionandina.org)

Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC)  
Global Secretariat

Laan van Meerdervoort 70  
2517 AN The Hague, The Netherlands  
The Chamber of Commerce number is 4121740T  
+31 (0)70 311 0970 | F +31 (0)70 3600194

[www.gppac.net](http://www.gppac.net) | [www.peaceportal.org](http://www.peaceportal.org)

